

41ª REUNION — 1ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 1º DE 1954

Presidencia del doctor Antonio J. Benítez

Secretarios: doctores Rafael V. González y Eduardo T. Oliver

DIPUTADOS PRESENTES:

ACOSTA, Policarpo
AGUERO, Teodomiro de la Luz
ALBAKELLOS, Juan
ALBREJEU, Oscar E.
ALENDE, Oscar Eduardo
ALONSO, José
ALVAREZ, Magdalena
ARGANA, José María
ARIAS, Jesús Pablo
ASTORGANO, José
ATALA, Luis
BALBI, Almar A.
BELNICOFF, Manuel
BENITEZ, Antonio J.
BIDEGAIN, Oscar R.
BIONDI, Josefa
BLASI, Héctor A.
BRIGADA "e" GÓMEZ, Josefa Dominga
BRIZUELA, Juan Francisco
BUSTOS CIERRO, Raúl C.
CAMPORA, Héctor J.
CAMUS, E. P.
CANTORE, Luis
CARBALLIDO, Dorindo
CASTAGNINO, Héctor
CASTRO, Orlandi
CASUCCIO, María Elena
CHALUP, Hugo del Valle
DACUNDA, Angélica E.
DA ROCHA, Alejandro J.
DEGLIOMINI, de PARODI, Della D.
DEGREEF, Juan Ramón
DEIMUNDO, Antonio J. C.
DEL RIO, Arturo E.
DE PRISCO, Guillermo
DIAZ DE VIVAR, Joaquín
DISKIN, David
D'JORGE, Luis
DOMINGUEZ, Roberto
DUSSAUT, Santiago
ESPEJO de RAMOS, Juana Alicia
FASSI, Santiago Carlos
FERNANDEZ, Hernán S.
FERRER ZANCHI, Alfredo G.
FLORES, Francisca A.
FONTANA, Alfredo
FORTEZA, Eduardo J.
GAGO, Bernardo
GARCIA, Juan C.
GOBELLO, José
GOITIA, Carlos Inocencio
GOMIS, Pedro A. J.
GONZALEZ, Antonio F.
GONZALEZ, Ventura
GRAMAJO, Rodolfo
GRO, Carlos en Parlamentaria

HERMIDA, Antonio
IDOMANICO, Humberto
LABANCA, Enrique V.
LANFOSSI, Adolfo
LANNES, Héctor L.
LOPEZ, Gerardo
LOPEZ, Plácido Guillermo
MACABATE, Manuel E.
MACRI, Ana Carmen
MARTINEZ, Darwin
MATTIS, Eduardo
MERLO, Patrocinio
MESSINA, Bernardo R. A.
MIEL ANQUIA, Angel J.
MONTES, Abel
MOYA, Isaac Donald
MUSACCHIO, Miguel
NUDELMAN, Santiago I.
ORDONEZ PARDAL, Pedro A.
ORLANDI, Romulo E.
OSELLA MUÑOZ, Enrique
OTERO, Pedro Ramón
PALLANZA, Adolfo
PARINO, Edmundo
PELLERANO, Jorge S.
PERAITA, Angel Enrique
PEREZ OTERO, Tito V.
PERICAS, Luis
PICERNO, José E.
PIOVANO de DE CASTRO, Mafalda
POSADA, José E.
PRACANICO, Zulema N.
PRESTA, José
PRESTE, Pascual N. I.
RABANAL, Francisco
RINALDI, Luis
ROCAMORA, Alberto V.
ROCHE, Luis Armando
RODRIGUEZ de COPA, Seferina del C.
ROUGGIER, Valerio S.
RUMBO, Eduardo I.
SAINZ, Hector Agustín
SALABER, Carmen
SALVO, Hilario F.
SCANDONE, Eduardo Ernesto
SIBOLDI, Agustín
TEJADA, Beato Miguel
TEJADA, María Orbellina
TOFANELLI, Oreste
TESORIERI, José V.
TOMMASI, Victorio M.
TORIEROLA de ROSELLI, Isabel A.
ULLOA, José Manuel
VERGARA, Amando
VILLAFANE, José María
VILLA MACIEL de CANO, Otilia
WEIDMANN, Rodolfo A.
ZEREGA, Oreste A.

AUSENTES. CON LICENCIA:

ALBERTELLI, Pedro A. F.
ARGUMEDO de PEDROZA, Celfa
CLEMENT, Fernando Abel
DI BERNARDO, Almerindo D.
GAETA de TURBE, Dora Matilde
GÓMEZ, Manuel Vicente
LUNA, Pedro Antonio
RODRIGUEZ, Celedón E.
VILLARREAL, Pedro

AUSENTES. CON AVISO:

ACUÑA, Judith Elida
AGUILAR de MEDINA, Generosa D.
ALVAREDO de BLANCO SILVA, Obdulia
CAMPANO, Guillermo M.
CARENA, Ezio Armando
CARRERAS, Ernest
CARRIZO, Francisco Isidro
CAVIGLIA de BOYKENS, María G.
COBELLI, Francisco
DOMINGUEZ, Carlos Joaquín
FERNÁNDEZ, Expedito
GALLO, Luis M.
GIANOLA, Jorge N.
LATELLA FRIAS, Donato
LOGUERIO, Dante N.
LÓPEZ, Noé
LÓPEZ, Pablo
MAESTRO, José Ángel
MARCO, Teodoro E.
MIGUEL de TUBÍO, Josefa
MORENO, Silverio
MORESCHI, Humberto P.
PAZ, Edvino Alfredo
PERETTE, Carlos H.
PEREZ, José C.
RODRIGUEZ, Manuel Félix
SANTUCHO, Oscar D.
SPACHESSI, Modesto A. E.

AUSENTE. SIN AVISO:

ORTIZ de SOSA VIVAS, Dominga I.

DELEGADOS PRESENTES:

ESCARDO de COLOMBO LERRA, P.
FADUL, Esther M.
FERNICOLA, Elena A.
MARINO, Ramón
MONTAÑA, Agapito
PAROLIN, Orlando L.
RIOS, Octavio A.
RODRIGUEZ GALLARDO, A.
SAN MARTÍN, Pedro J.

AUSENTES. CON AVISO:

BARRERA, Néctar A.
POLO, Antenor

SUMARIO

- 1.—Enarbolamiento de la bandera nacional. (Página 2378.)
- 2.—Convocatoria a sesiones extraordinarias. (Página 2378.)
- 3.—Versiones taquigráficas. (Página 2379.)
- 4.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: aceptación del convenio internacional para la seguridad de la vida en el mar y de las reglas internacionales para prevenir colisiones en el mar, suscritos en Londres en 1948. (Página 2379.)
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio de cesión a la provincia de Salta de un tramo de camino. (Página 2380.)
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prohíbe el empleo de cerusa y de sulfato de plomo en los trabajos de pintura interior de los edificios. (Página 2380.)
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza la permuta de bienes de propiedad del Estado nacional por otros del patrimonio municipal, en Lincoln, Buenos Aires. (Página 2381.)
- V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se dispone la expropiación de un inmueble ubicado en Concordia, Entre Ríos. (Página 2382.)
- VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueban excesos de inversión de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en el ejercicio de 1953. (Página 2382.)
- VII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica el decreto que autorizó la cesión a la República de Paraguay de elementos destinados a la lucha contra la langosta. (Página 2383.)
- VIII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica el decreto que da categoría de embajada a la representación diplomática de la República en el Líbano. (Página 2384.)
- IX.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se ponen en conocimiento de la Honorable Cámara actividades de legisladores nacionales en ocasión de un movimiento estudiantil. (Página 2384.)
- X.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se reforma el Régimen impositivo. (Página 2386.)

- XI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: presupuesto general de gastos y recursos para los ejercicios de 1955 y 1956. (Página 2405.)
- XII.—Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 2425.)
- XIII.—Comunicaciones oficiales. (Página 2425.)
- XIV.—Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2425.)
- XV.—Peticiónes particulares. (Página 2426.)
- XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Latella Frías: erección de un templete en la iglesia catedral de Córdoba para guardar los restos del general Paz. (Página 2427.)
- XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Belnicoff: modificación del inciso 3º del artículo 83 de la Constitución Nacional, para el establecimiento de la institución de intendente de la ciudad de Buenos Aires electo por voto popular. (Página 2427.)
- XVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Ferrer Zanchi: subsidio a las familias de las víctimas del naufragio del vapor «General San Martín». (Página 2427.)
- XIX.—Proyecto de ley del señor diputado Ferrer Zanchi por el que se declara trabajo insalubre el que realiza el personal de los archivos de los tribunales de la Capital Federal. (Página 2427.)
- XX.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:
 - 1.—De los señores diputados Ferrer Zanchi y Alende: pedido de informes sobre hechos ocurridos en la Facultad de Ingeniería. (Página 2427.)
 - 2.—De los señores diputados Ferrer Zanchi y Alende: pedido de informes relativos a la detención de estudiantes. (Página 2427.)
 - 3.—De los señores diputados Ferrer Zanchi y Alende: pedido de informes relativos a la clausura de centros de estudiantes. (Página 2427.)
 - 4.—Del señor diputado Nudelman: pedido de informes sobre hechos ocurridos en la Facultad de Ingeniería. (Página 2428.)
 - 5.—De los señores diputados Ferrer Zanchi y Alende: pedido de informes relativos a la detención de estudiantes. (Página 2428.)
 - 6.—Del señor diputado Alende y otros: declaración relativa a la detención de ciudadanos guatemaltecos. (Página 2428.)

X

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1954.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, mediante el cual se reforma el régimen tributario nacional.

Como podrá verse, las disposiciones proyectadas tienden al cumplimiento de los objetivos generales y especiales establecidos en materia de política impositiva por el segundo Plan Quinquenal (capítulo XXII), utilizando la función del impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la justicia y de la economía social del país.

La iniciativa constituye pues, como no escapará a la apreciación de vuestra honorabilidad, una etapa más en la adecuación de nuestro régimen rentístico a la orientación justicialista dada al país en el orden económico-financiero a partir del año 1946, proceso que ha demandado más de una vez la atención de ese honorable cuerpo en los últimos años, debido tanto a iniciativas propias como a emanadas de este Poder Ejecutivo.

El proyecto que se acompaña configura un vasto plan de reformas impositivas, de trascendente contenido social. Se funda en el sano principio de obtener una equitativa redistribución de la carga fiscal en relación con la capacidad contributiva de la población. En tal sentido, procura alcanzar una incidencia equilibrada de los tributos, a cuyo efecto, sin perjuicio de ampliar con carácter general el ámbito no imponible, desgrava en mayor proporción los réditos del trabajo personal y los consumos indispensables, lo que ha de permitir aliviar notablemente la presión tributaria que recae sobre los sectores más modestos de la población.

Las reformas proyectadas logran estos propósitos sin perturbar el proceso de capitalización económica del país, pues esas desgravaciones no son compensadas con aumentos equivalentes en otros sectores del sistema impositivo, todo lo cual está llamado, sin duda, a estimular el desarrollo de las actividades económicas, sobre las que descansan, en definitiva, el bienestar de la colectividad y el engrandecimiento de la Nación.

Desde luego, esta política no puede llevarse a cabo sin una acción decidida de contención y parsimonia de las expensas presupuestarias, pues no debe perderse de vista que el alcance de toda reforma impositiva se halla subordinado a la magnitud de las erogaciones exigidas por la atención de los servicios a cargo del Estado. Con ello va dicho que este plan de reformas impositivas se vincula estrechamente con el propósito, reiteradamente expuesto por el Poder Ejecutivo, de restringir al máximo los gastos públicos de la Nación.

El proyecto, cuyas principales disposiciones se analizan seguidamente en particular, contempla, además, la finalidad de perfeccionar nuestro régimen fiscal, adecuándolo a la evolución de los principios que rigen la técnica financiera.

I. — Ley de procedimientos

La ley 11.683 (texto ordenado en 1952) que regula los procedimientos para la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes a cargo de la Direc-

ción General Impositiva, se modifica mediante el artículo 1º del proyecto en dos aspectos principales: recargos por mora y prescripción de la acción de repetición.

Es un principio incuestionable que la obligación tributaria no se cumple sólo con la aportación al erario público de las correspondientes prestaciones pecuniarias, sino que éstas han de realizarse dentro de los plazos fijados, a fin de asegurar el desenvolvimiento normal de las finanzas del Estado. Pagar puntualmente es, pues, un deber ineludible y el contribuyente que no lo hace así, sin una razón atendible, debe ser sancionado con severidad.

La ley que se comenta consagra dos grandes franquicias: el beneficio de la presentación espontánea, que libera de toda penalidad a quienes se acogen al mismo, y la concesión de facilidades de pago por razones justificadas. Consecuentemente, no existe razón valedera para incurrir en infracciones que motiven la aplicación de recargos.

Sin embargo, en la práctica, dichas infracciones son frecuentes y no cabe atribuirles otro origen que la lenidad de los recargos vigentes. En efecto, en la actualidad, conforme al artículo 42 de la ley, el máximo del recargo, cualquiera sea el lapso de mora, alcanza sólo al 20 %, circunstancia que los contribuyentes remisos aprovechan para diferir indefinidamente el pago de sus obligaciones impositivas, alentados inclusive por la posibilidad de liberarse totalmente de las mismas si prescribiera la acción del fisco para exigir su cumplimiento.

Para evitar situaciones como las descritas y con el objeto de que el régimen organizado por la ley cumpla su doble finalidad, intimidatoria y resarcitoria, en su caso, se aumentan los recargos progresivamente, partiendo del 20 % actual que rige para retardos superiores a tres meses, hasta llegar al 100 por ciento, cuando la mora exceda de 5 años.

En cuanto a la acción de repetición de impuestos, cuyo término de prescripción es de 2 ó 5 años, según las normas actuales y la naturaleza de los pagos, el proyecto establece un término uniforme de 5 años para todos los casos.

A este respecto, cabe señalar que la existencia de dos plazos distintos, aparte de promover dudas y discusiones acerca de cuál de ellos corresponde aplicar en los casos concretos, puede dar lugar a situaciones de inequidad cuando se trata de reajustar declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. En efecto, ocurre con frecuencia que en algunos períodos fiscales se determinan saldos a favor del contribuyente y en otros, a favor del fisco. Como la prescripción para este último es siempre de 5 años y para aquél sólo de 2 en determinados supuestos, resulta que el contribuyente se ve obligado a ingresar todas las diferencias en su contra, y no puede, en cambio, solicitar la acreditación o devolución de algunas que le son favorables.

Con la uniformidad de ambos términos se corrige la anomalía señalada y se obtiene una adecuada solución del problema.

Las restantes modificaciones que se introducen en la ley 11.683 por el artículo 1º, tienden a perfeccionar la técnica de aplicación de los gravámenes y actualizar los procedimientos administrativos y judiciales en orden al cumplimiento de los objetivos XXII, G. 7 y E. 17 del segundo Plan Quinquenal.

II. — Impuesto a los réditos

Por el artículo 2º del proyecto se modifican varios aspectos de la ley de impuesto a los réditos. Merecen especial mención, el aumento de las sumas deducibles en concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y adicional por rentas de cuarta categoría; la reestructuración de la escala adicional del gravamen; el aumento de las amortizaciones extraordinarias; la unificación del impuesto a las sociedades de capital; la exención total a los intereses de depósitos en caja de ahorro y el tratamiento de las actividades ejercidas por corredores, viajantes de comercio y despachantes de aduana.

Concordante con la política reiteradamente expuesta y seguida por el Poder Ejecutivo, en el sentido de favorecer a las clases económicamente menos dotadas, se proyectan dos medidas de singular importancia que se complementan entre sí y que concurrirán armónicamente al mejor logro de los objetivos G. 1 (Distribución de la carga fiscal), G. 4 (objetivos sociales de la política impositiva), E. 11 (Integración del núcleo familiar) y E. 13 (Trabajo personal) del capítulo XXII del segundo Plan Quinquenal. Se trata del aumento de las deducciones en concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y adicional por rentas de cuarta categoría, por una parte, y por la otra, de la reestructuración de la escala de la tasa adicional progresiva que actualmente grava los réditos superiores a \$ 5.000 anuales.

Los mínimos no imponibles vigentes —\$ 3.600 anuales para las categorías primera y segunda y \$ 6.000 para las categorías tercera y cuarta— se elevan y uniforman en la cantidad de \$ 7.200 anuales. La uniformación tiene su razón de ser en la circunstancia de que, tratándose de un mínimo no imponible, es decir, de una desgravación que tiende a evitar que el impuesto incida sobre las sumas que se consideran indispensables para sufragar las necesidades primordiales, resulta justo y equitativo que gocen del mismo beneficio todos los contribuyentes, cualesquiera fueren las fuentes de sus réditos.

En cuanto a cargas de familia, los aumentos son los siguientes: adicional por ese concepto, de \$ 1.500 a \$ 2.400; por cónyuge, de \$ 1.500 a \$ 2.400; por hijos y otras cargas, de \$ 1.200 a \$ 1.800. Finalmente, la deducción adicional para los contribuyentes que obtengan réditos del trabajo personal, se eleva de pesos 12.600 a \$ 15.000 anuales.

El acrecentamiento del monto de las deducciones por los conceptos que se acaba de indicar, se traducirá en las siguientes cifras para los contribuyentes con «familia-tipo», (casados y con dos personas a su cargo):

Categorías	Deducción actual m\$.	Deducción proyectada m\$.	Diferencia m\$.
Primera y segunda ..	9.000	15.600	6.600
Tercera	11.400	15.600	4.200
Cuarta	24.000	30.600	6.600

Es interesante advertir que las nuevas desgravaciones resultantes de las modificaciones proyectadas, traerán como consecuencia la eliminación de una apreciable cantidad de contribuyentes directos y disminuirán además las tareas a cargo de los agentes de retención —muchos de los cuales quedarán totalmente liberados de ellas— toda vez que un gran número de personas en relación de dependencia dejarán de ser

contribuyentes (un empleado casado, con dos hijos, tendrá \$ 2.350 mensuales, aproximadamente, exentos del impuesto a los réditos). Por otra parte, la eliminación de una estimable cantidad de contribuyentes marginales, permitirá a la Dirección General Impositiva efectuar un más amplio y efectivo contralor sobre los demás responsables del gravamen.

Como no escapará al elevado criterio de vuestra honorabilidad, las modificaciones enumeradas importarán una norma considerable en la recaudación del impuesto a los réditos; no obstante, este Poder Ejecutivo no vacila en afrontar el significativo sacrificio que ello implicará para el erario, en favor de la consecución de los propósitos de política social que orientan la acción del gobierno.

Como se ha expresado más arriba, el aumento de las deducciones en concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y adicional para rentas de trabajo personal, se complementa en el proyecto con una reestructuración de la escala progresiva de la tasa adicional del impuesto, con el objeto de redistribuir su carga en forma tal de aliviar a las rentas pequeñas y medianas, iniciando su aplicación a partir de los réditos netos imponibles que excedan de \$ 10.000 anuales en lugar del límite vigente que es de \$ 5.000, y sin que por ello se eleve el máximo actual que se mantiene en el 33 por ciento.

Corresponde hacer notar que esta reestructuración significará un menor desembolso por impuesto a los réditos para todos los contribuyentes con rentas netas imponibles de hasta \$ 80.000 anuales, y que su gravitación sobre los que tengan rentas superiores a dicha cifra será sumamente leve, toda vez que en conjunto la tasa promedio del gravamen no experimenta variación.

Por último, cabe poner de relieve que la conjunción de ambas medidas se traducirá en el pago de sumas menores que las actuales para todos los contribuyentes de la «familia-tipo», (casados y con dos personas a su cargo), con réditos netos de hasta \$ 150.000 anuales.

Por la ley 14.060 vuestra honorabilidad facultó al Poder Ejecutivo para admitir en el balance impositivo del impuesto a los réditos amortizaciones extraordinarias sobre rubros del activo fijo, con el propósito de ajustar dicho balance a la realidad económica, tratando de que expresara beneficios reales y no valores teóricos.

En uso de dicha facultad se dictó el decreto 5.802/52, que estableció los coeficientes de aplicación sobre las amortizaciones ordinarias para calcular las extraordinarias, en función de los ejercicios en que los bienes fueron adquiridos. Por el mismo decreto se dispuso que las amortizaciones extraordinarias no tendrían incidencia alguna para el cálculo del capital y de la utilidad gravada con el impuesto a los beneficios extraordinarios.

Las mismas razones que motivaron la implantación del sistema de amortizaciones extraordinarias mueven al Poder Ejecutivo a reverter en los siguientes aspectos: monto de los coeficientes admitidos, ejercicios de adquisición de los bienes y aplicación para el impuesto a los beneficios extraordinarios.

En cuanto a la magnitud de los coeficientes de amortización extraordinaria se considera prudente aumentarlos en un 75 % aproximadamente, con respecto a los fijados por el citado decreto. En lo que concierne a las adquisiciones susceptibles de beneficiarse con dichas amortizaciones, se estima necesario incluir las efectuadas en los ejercicios 1951, 1952 y

1953, determinando para el primero un coeficiente del 40 % y para los dos últimos uno del 10 por ciento.

Por otra parte y atendiendo a la íntima vinculación existente entre los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios, a tal punto que para establecer la utilidad imponible a los efectos de liquidar el gravamen nombrado en segundo término se parte de la que arroja el balance impositivo practicado para el primero, se conceptúa, y así se proyecta, que corresponde admitir la deducción de las amortizaciones extraordinarias también en el impuesto a los beneficios extraordinarios.

Este procedimiento, al mismo tiempo que significará una apreciable mejora en la técnica de aplicación de los tributos, permitirá simplificar la liquidación del impuesto a los beneficios extraordinarios, ya que el cómputo en éste de las amortizaciones extraordinarias reemplazará la actual deducción de un importe adicional equivalente al monto de las amortizaciones ordinarias, tal como se explica más adelante.

Otra de las modificaciones comprendidas en el artículo 2º del proyecto es la relativa a la unificación del impuesto en materia de sociedades de capital.

Conforme al régimen en vigor, las sociedades anónimas constituidas en el país pagan el 24 % sobre la utilidad impositiva del ejercicio y retienen, además, el 6 % sobre los dividendos en la oportunidad en que proceden a su distribución. Por su parte, las sociedades de capital constituidas en el extranjero abonan el 30 % sobre su utilidad imponible, si tienen un establecimiento permanente en el país, y la misma tasa del 30 % por vía de retención, en el momento de acreditárseles o girárseles los réditos obtenidos en la República.

El sistema que rige actualmente para las empresas del país resulta innecesariamente complicado, tanto para los contribuyentes como para la administración fiscal, al mismo tiempo que constituye un desigual tratamiento basado exclusivamente en la forma jurídica adoptada para su organización por la entidad. En efecto, de acuerdo con la ley, en el caso de únicos dueños o sociedades de personas, se gravan los beneficios con la totalidad del impuesto en el ejercicio en que se obtiene; en cambio, en el de sociedades de capital, parte del impuesto se ingresa cuando se obtiene la utilidad (24 %) y parte (6 %) cuando se la distribuye.

A corregir esta anomalía tiende la reforma que en este aspecto se propone, la cual, como surge de lo expuesto, servirá para racionalizar en la materia la aplicación del tributo (objetivo XXII, G. 7 del segundo Plan Quinquenal).

Constituye una preocupación constante de este Poder Ejecutivo, compartida por vuestra honorabilidad, la de estimular y fomentar por todos los medios posibles el ahorro popular. Esta preocupación, reflejada en el objetivo XXII, E. 9, del segundo Plan Quinquenal, que prevé exenciones y reducciones impositivas adecuadas a fin de promover la difusión del ahorro en todo el país, se concreta en el orden tributario mediante la desgravación total a los intereses de los depósitos en caja de ahorro, cualquiera sea la modalidad adoptada para su liquidación y pago.

Al respecto, corresponde destacar que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, sólo están exentos del impuesto a los réditos los intereses que no excedan en conjunto de \$ 50 por año fiscal y por persona, en tanto que la exención proyectada, además de proceder cualquiera sea el importe de aquéllos, al-

canza, asimismo, a los que se liquidan y pagan bajo modalidades especiales, como es el caso de los intereses acreditados en las cuentas de participación en valores mobiliarios, recientemente implantadas por el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias con el objeto de canalizar el ahorro popular hacia las fuentes de la economía nacional.

Correlativamente y para contribuir al incremento de los sistemas de ahorro a través de los planes de capitalización y seguro, se exime también del gravamen a las diferencias entre las cuotas o primas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los casos de bonos de capitalización y en los de seguros de vida y mixtos.

De acuerdo con las normas de la ley 11.682 (texto ordenado en 1952) los réditos derivados del ejercicio de actividades de corredor, viajantes de comercio y despachantes de aduana, se hallan incluidos en la tercera categoría (artículo 49) y, por consiguiente, no gozan de la deducción adicional que la misma ley acuerda para las rentas de cuarta categoría.

Sin embargo, no puede desconocerse que en la generación de los réditos provenientes de las actividades enunciadas, interviene únicamente o en forma netamente preponderante el trabajo personal, razón ésta que justifica la inclusión de los réditos de que se trata dentro de la cuarta categoría, como se proyecta.

III. — Impuesto a los beneficios extraordinarios

Entre las reformas que se introducen a la ley del impuesto a los beneficios extraordinarios (artículo 4º del proyecto), se encuentra en primer término la extensión a este gravamen de las amortizaciones extraordinarias permitidas para el cálculo del impuesto a los réditos, vale decir, la supresión de la deducción de un importe equivalente a las amortizaciones ordinarias correspondientes a inversiones de activo fijo efectuadas con posterioridad al 1º de enero de 1940. En esta forma, se tendrá una sola deducción por el mismo concepto para ambos tributos, con las consiguientes ventajas técnicas y prácticas.

Corresponde señalar que aparte de tales ventajas, el nuevo sistema permitirá corregir la inequidad del tratamiento vigente que, al no tomar en cuenta la época de las adquisiciones, beneficia, en términos generales, en mayor medida a las empresas nuevas con relación a las de más antigua data.

Sin embargo, atento a que la aplicación del régimen propuesto podría, en algunos casos, determinar una menor deducción por el concepto considerado, se ha creído justo complementarlo con la adecuación del mínimo no imponible vigente para este impuesto, elevándolo de \$ 20.000 a \$ 30.000.

En cuanto a las demás modificaciones contempladas en el mencionado artículo, tienen por objeto uniformar los regímenes de los gravámenes que recaen sobre utilidades, implantando para beneficios extraordinarios el sistema que rige para réditos y ganancias eventuales en lo relativo al período (4 años) dentro del cual pueden compensarse quebrantos de ejercicios anteriores; y hacer más flexibles las disposiciones que reglan la deducción de sueldos de dueños o socios de sociedades de personas y del porcentaje en compensación del impuesto a los réditos, facultando al Poder Ejecutivo a fijar unos y otros por decreto, atendiendo a las fluctuaciones financiereconómicas y a las variaciones que se operen en la tasa promedio del impuesto a los réditos, respectivamente.

IV. — Impuesto a las ganancias eventuales

El artículo 5º del proyecto trata del impuesto a las ganancias eventuales, cuyas modificaciones, substanciales en varios aspectos, se traducirán en un ponderable alivio para los contribuyentes que obtengan beneficios sujetos a dicho gravamen.

En primer término, cabe subrayar la deducción adicional que se proyecta para los casos de ventas de inmuebles y automotores. Conforme a la misma, el costo de los bienes transferidos se incrementará en un 5 % por cada año transcurrido desde su adquisición hasta 1945, y en un 10 %, desde 1946 hasta 1953 inclusive.

Esta desgravación, enderezada a compensar el alza experimentada por los valores de los bienes en general, y en particular de los inmuebles, permitirá una apreciable actualización de los costos computables a los efectos impositivos y redundará en una significativa disminución del impuesto a pagar en el momento de la transferencia.

Corresponde también poner de manifiesto la reforma que se proyecta para el caso de transferencia de bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Actualmente, se considera valor de costo, a los fines fiscales, el que tuvo el bien en manos del causante, cualquiera fuere la época en la cual fué comprado o construido. Al propiciar que en lugar de computar dicho valor se tome el fijado para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se persiguen dos propósitos. Por una parte, la actualización del valor a considerar para establecer el gravamen, con la consiguiente reducción en el impuesto a pagar; y por la otra, la uniformación de los valores que sirven de base para la imposición con los que en la misma materia rigen para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y para el impuesto a los réditos.

Las medidas que se acaban de esbozar tendrán una acentuada repercusión en los ingresos fiscales, toda vez que originarán una sensible reducción en la recaudación del impuesto a las ganancias eventuales. No obstante, este Poder Ejecutivo está seguro de que vuestra honorabilidad compartirá la conveniencia de su implantación en orden al cumplimiento de los objetivos sociales y económicos que este gobierno se ha trazado.

Pero, así como los poderes públicos se hallan decididos a afrontar el sacrificio que tales medidas importarán para el erario, también lo están para adoptar todas las providencias conducentes a evitar mermas que provienen de maniobras realizadas para evadir el pago en su justa medida del impuesto de que se trata.

Lamentablemente, la experiencia ha evidenciado, y ello es público y notorio, que frecuentemente los vendedores, sujetos del gravamen, en connivencia con los compradores, con los intermediarios y aun con los profesionales que intervienen en las operaciones de compraventa de inmuebles y otros bienes alcanzados por la ley, simulan precios de transferencia inferiores a los reales para evadir en todo o en parte el pago del tributo.

Impedir la consumación de maniobras de esta naturaleza, que constituyen evidentes fraudes, es el fin que persigue el párrafo que se propone agregar al artículo 6º de la ley, según el cual, la Dirección General Impositiva podrá impugnar y ajustar a los

valores corrientes en plaza los precios de venta convenidos entre las partes cuando sean notoriamente inferiores a aquéllos, como asimismo considerar a todos los intervinientes personal y solidariamente responsables por el impuesto omitido y hacerles pasibles de las multas previstas para los defraudadores fiscales.

El Poder Ejecutivo confía en que no deberá recurrirse a la aplicación de tales sanciones, máxime si se tiene presente que el espíritu de justicia y liberalidad que informa a las modificaciones proyectadas, impone a los contribuyentes el deber moral de corresponder a las mismas satisfaciendo el gravamen que legalmente corresponda; pero está firmemente dispuesto a reprimir con todo el rigor que emana de la nueva norma las aludidas maniobras, toda vez que éstas no sólo perjudican las arcas fiscales, sino a los propios contribuyentes, ya que los recursos que se dejan de percibir a raíz de las evasiones impositivas, deben ser suplidos con el aumento de los gravámenes vigentes o la creación de otros nuevos para satisfacer las necesidades financieras del Estado.

Para terminar con el comentario relativo al artículo 5º del proyecto adjunto, resta referirse a la norma que se propone para establecer un tratamiento impositivo especial para las primas de emisión de acciones, a partir del 1º de enero de 1955. Conforme a su acepción técnica, contable y jurídica, la prima de emisión constituye el sobreprecio que se exige sobre el valor nominal de los papeles que emite una sociedad o, en otras palabras, es la diferencia entre el precio de colocación o subscripción de la acción y su valor nominal.

De acuerdo con este concepto clásico de la prima y atento a que en la ley no existe disposición alguna que la contemple en forma especial o que le asigne un valor distinto al que resulta de aplicar aquel criterio, como ocurre en otros casos (por ejemplo, valuación fiscal en lugar de valor real, cuando se trata de inmuebles), hasta la fecha no ha quedado otro arbitrio que gravar con el impuesto la totalidad de la prima, esto es, la diferencia entre el precio de subscripción y el valor nominal de la acción.

Este temperamento de inquestionable validez ha dado lugar a que, con el objeto de evitar la carga del tributo, se opte en la práctica por emitir a la par acciones que fácilmente podrían colocarse con primas de consideración. Esta modalidad significa un perjuicio para las entidades emisoras que en esta forma dejan de incorporar a su actividad económica las sumas que habrían importado las primas de emisión.

Por las razones expuestas y con el fin de coadyuvar, en el orden impositivo, a la consolidación de la economía de las empresas organizadas bajo la forma de sociedades de capital, se propicia la sanción de la norma específica aludida, según la cual sólo estará sujeta al impuesto a las ganancias eventuales la diferencia entre el valor de colocación de la acción y su valor efectivo, calculado en relación con el capital de la entidad ajustado de acuerdo con las normas que rigen el impuesto a los beneficios extraordinarios.

V. — Impuesto a las ventas

Las modificaciones proyectadas al impuesto a las ventas —artículo 6º del proyecto— concretan varios de los objetivos señalados en el segundo Plan Quin-

quenal. Así, se exime del gravamen a los aceites comestibles, convirtiendo en definitiva la suspensión dispuesta por decreto 11.894/54 y se desgravan asimismo las ventas de miel de abejas (objetivo XXII, E. 14). Se exceptúa también a los bloques premoldados de hormigón que en las construcciones modernas reemplazan con ventaja a los ladrillos, que ya gozan de la exención (objetivo XXII, E. 15). Se amplía la exención vigente para la venta de libros de texto, a toda clase de libros y asimismo al papel destinado a su impresión (objetivo XXII, E. 16). Se convierte en desgravación definitiva la suspensión del impuesto a las ventas de los productos de explotaciones mineras dispuesta por decreto 9.959/52, en concordancia con la amplia liberación impositiva prevista en el proyecto de Código de Minería elevado oportunamente a consideración de vuestra honorabilidad, y con las demás iniciativas del gobierno destinadas al fondo de la industria minera (objetivo G. 5 del capítulo XXII).

VI. — Impuestos internos

Las reformas que por el artículo 7^o del proyecto se introducen en el texto ordenado en 1952 de las leyes de impuestos internos, tienen por finalidad la de redistribuir equitativamente y manteniendo un adecuado equilibrio los gravámenes que recaen sobre el consumo, al mismo tiempo que perfeccionar la técnica de su aplicación y ajustar al máximo la fiscalización para evitar evasiones.

La reforma propuesta a los artículos 31 y 35, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar las alícuotas vigentes en materia de cigarrillos, cigarros y tabacos, persigue fundamentalmente posibilitar el ajuste de los precios de dichos productos para compensar los mayores costos de producción determinados por las mejoras de sueldos y salarios fijadas por los convenios recientemente suscritos, como asimismo, dotar al régimen de la suficiente flexibilidad a fin de contemplar futuras necesidades de éste o parecido tipo.

En lo relativo a alcoholes, el cambio de sistema consiste básicamente en sujetar a la tasa de m\$N 0,115 por litro y por grado (equivalente a la tasa de m\$N 0,03 y sobretasa de m\$N 0,085 actuales) a todo alcohol que no se inutilice para el consumo de boca, quedando gravados con impuestos de m\$N 0,03 por litro y por grado, o totalmente exentos los alcoholes desnaturalizados, según fuere su destino.

El nuevo régimen contribuirá a impedir la elaboración clandestina de bebidas alcohólicas, evitará el desvío de los alcoholes puros de sus usos específicos, perfeccionará la percepción del gravamen concentrándola en la fuente de producción y facilitará su fiscalización adecuada, sin que por ello se aumente el costo del alcohol que las distintas industrias utilizan como materia prima para la fabricación de sus productos.

Corresponde señalar que la aparente elevación del estampillado de los vinos compuestos y similares, que de m\$N 0,25 por litro pasa a ser de m\$N 1,30, no constituye un aumento del gravamen que en la actualidad tributan, toda vez que el mayor estampillado está destinado a substituir la sobretasa de m\$N. 0,085 que se satisface ahora por el alcohol contenido en el vino utilizado como materia prima.

Las reformas que se propician a los artículos 74 y 75 de la ley de impuestos internos, tienden a adecuar los respectivos textos a las disposiciones correlativas de la ley 12.988 y de la ley de sellos, respectivamente.

En materia de impuesto a los artículos suntuarios, se circunscribe la aplicación del gravamen vigente a los objetos que en razón de los materiales empleados en su fabricación constituyen inversiones de lujo, es decir a los que por ser costosos o superfluos, o ambas cosas a la vez, no satisfacen necesidades imprescindibles y, por consiguiente, pueden soportar con facilidad el tributo sin que éste grave como factor negativo sobre la economía general (objetivo XXII, G. 5 del segundo Plan Quinquenal). Precisamente, para evitar tal incidencia se exime en forma expresa de la imposición a aquellos objetos que no obstante confeccionarse con algunos de los materiales enumerados en el nuevo artículo 111, no tienen carácter suntuario.

Las normas que con respecto a bebidas alcohólicas contiene el artículo 7^o del proyecto adjunto, se complementan con las establecidas en el artículo 8^o en lo referente a hidromeles, cuyo fin es el de corregir una deficiencia de la actual ley que, al equiparar el aludido producto a una bebida alcohólica, lo sujeta a un gravamen proporcionalmente superior al que tributan los vinos y sidras, a los cuales se asemeja por sus características naturales y organolépticas.

VII. — Contribución inmobiliaria

Consecuente con los propósitos reiteradamente expresados por este gobierno, en cumplimiento de los objetivos VIII, E. 7 y XXII, E. 15 del segundo Plan Quinquenal y, en concordancia con las medidas adoptadas en otras esferas de su competencia, con el objeto de fomentar la construcción de viviendas y de mitigar los efectos del alza del costo de las construcciones y de los valores inmobiliarios, el artículo 9^o del proyecto contiene una serie de disposiciones que entrañan apreciables rebajas en materia de contribución inmobiliaria.

Conviene recordar aquí que por la ley 14.273 sancionada por vuestra honorabilidad el año próximo pasado, se autorizó a este Poder Ejecutivo para diferir la revaluación de los inmuebles que debía practicarse en 1953. Se fundaba esta medida en la necesidad de evitar los efectos que en la economía de los propietarios iba a producir el aumento del impuesto que resultaría de la actualización de los valores fiscales en momentos en que los precios de las locaciones se hallaban congelados.

Esta prudente disposición se complementa ahora con la reforma del artículo 21 de la ley, en cuya virtud se rebaja en seis puntos la tasa de la contribución correspondiente a los inmuebles edificados, habilitados o revaluados (por haberse efectuado ampliaciones o nuevas construcciones) desde el 1^o de enero de 1952.

Tal régimen diferencial ha de tener, por su propia naturaleza, una vigencia limitada y, por consiguiente, corresponderá que en oportunidad de practicarse la revaluación general prevista en el artículo 32 de la ley, se proceda a la uniformación de las tasas mediante la sanción de la pertinente norma legal.

Por otra parte se incorpora a la ley una disposición que exceptúa por diez años del mayor gravamen que pudiera corresponder a las construcciones efec-

tuadas de conformidad con el régimen estatuido por el decreto 16.465/47, concretando así la previsión contenida en dicho decreto y ratificando el decreto 9.810/54 que dejó en suspenso el cobro del impuesto hasta tanto vuestra honorabilidad se pronunciara al respecto. Una exención similar, pero limitada a la tercera parte de la contribución (parte correspondiente al impuesto territorial) se incluye para las construcciones de análoga naturaleza que se realicen con posterioridad a la vigencia del decreto 16.465/47.

En la misma proporción y para contribuir al fomento de la construcción de nuevas viviendas se exime por el término de cinco años a las habilitadas a partir del 1º de enero de 1955, a condición de que sean habitadas por sus dueños y siempre que su valuación fiscal no supere las cifras que fije la reglamentación.

Asimismo y para evitar el aumento de la contribución motivado por la revaluación que conforme a las normas vigentes corresponde practicar en los casos de división de edificios para su venta bajo el régimen de la propiedad horizontal, se prevé que tal hecho no dará lugar a la rectificación del avalúo fiscal vigente, con lo cual los nuevos propietarios pagarán, en la proporción correspondiente, el mismo y aun un menor gravamen que el que recaía sobre el inmueble antes de su división.

Finalmente y consecuente con la política de promover la construcción de viviendas, se ha estimado oportuno elevar la alícuota en vigor para los terrenos baldíos, del 20 ‰ al 30 ‰.

VIII. — Impuesto de sellos

Las modificaciones que por el artículo 11 del proyecto se introducen en la ley de sellos (texto ordenado en 1952) persiguen tres propósitos fundamentales: simplificar el régimen de aquellos gravámenes cuya aplicación en la práctica ha suscitado dificultades y promovido controversias, actualizar y suprimir algunas de las alícuotas diferenciales cuya existencia no responde a razones justificadas y coordinar los procedimientos administrativos y judiciales que se siguen en materia de sellos, con los que rigen para los demás tributos a cargo de la Dirección General Impositiva.

Dentro del primer grupo, merece destacarse la solución dada al problema de la jurisdicción en el caso de operaciones sujetas al impuesto realizadas en provincias con bancos oficiales nacionales, al que ha planteado la aplicación del tributo a los créditos en descubierto y a los depósitos, y al relativo a las operaciones de movimientos de fondos con el exterior.

En cuanto al primer aspecto, siendo incontestable que el carácter de establecimientos nacionales que revisten los bancos oficiales no altera la jurisdicción de las provincias para gravar con el impuesto local de sellos los actos que aquéllos celebran en sus territorios, en concordancia con lo dispuesto en la resolución 56/52 dictada por el Ministerio de Hacienda como consecuencia de una ponencia de la Sexta Conferencia de Ministros de Hacienda, se modifica el inciso b) del artículo 2º de la ley, en el sentido de que ésta sólo debe aplicarse cuando los actos concertados en provincias con establecimientos bancarios nacionales deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción federal, quedando los demás sujetos exclusivamente a sellado provincial.

En lo que se refiere al sistema de imposición vigente en materia de créditos y depósitos, los proble-

mas que ha traído su aplicación han sido más complejos aún. En efecto, ya en la doctrina, la cuestión de distinguir el depósito irregular del mutuo es de las más intrincadas, toda vez que estas figuras, en ciertos y determinados aspectos, presentan similitudes tales que hacen difícil su diferenciación.

Aunque la mayoría de los autores se inclina a opinar que a tal efecto debe atenderse primordialmente a la intención de las partes, teniendo en cuenta en interés de cuál de ellas se celebra el contrato, no debe olvidarse que este criterio no puede aplicarse en forma absoluta, por cuanto existen otras características y circunstancias que deben ponderarse al resolver los casos concretos. Si a lo expuesto se agrega el hecho de que en la ley en vigor los depósitos satisfacen un impuesto muy inferior al que recae sobre las operaciones de crédito, se explica el porqué de las frecuentes controversias administrativas y judiciales entre el fisco y los contribuyentes sobre la materia.

A obviar las dificultades reseñadas, haciendo la aplicación del gravamen clara y sencilla, tiende el cambio de régimen propuesto que establece una tasa única (calculada de modo tal que su producido equivalga al de las actuales) sobre todas las operaciones monetarias que devengan interés.

En el nuevo régimen proyectado se ha tenido buen cuidado de eximir del impuesto a los documentos en que se instrumenten fianzas o garantías de operaciones gravadas en los capítulos substituidos para evitar dobles imposiciones, como asimismo, en armonía y por los mismos fundamentos tenidos en cuenta para el impuesto a los réditos, se desgrava totalmente de sellos a los depósitos bancarios en caja de ahorro, incluidos los que se realicen en las cuentas de participación en valores mobiliarios del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias.

Como es notorio, las dificultades de interpretación que han suscitado las normas en vigor acerca de las operaciones de movimiento de fondos con el exterior regladas por el capítulo VI del título II de la ley, han dado lugar al sostenimiento de diversos criterios, tanto en el orden administrativo como en el judicial, y, desde luego, por parte de los contribuyentes.

Con el objeto de evitar los inconvenientes apuntados se propicia la implantación de un régimen que define en forma clara la materia imponible, circunscribiéndola, en principio, a las operaciones que se realizan con intervención del Banco Central de la República Argentina y de las instituciones autorizadas por éste para operar en cambios, sin perjuicio de que en la reglamentación se precisen detalladamente las operaciones sujetas a este gravamen.

Dentro del segundo grupo de reformas, cabe hacer referencia al aumento del 3 ‰ al 4 ‰ del impuesto que grava las operaciones de cambio, ya que no se justifica la aplicación a tales actos de una tasa menor que la que rige para la generalidad a los sujetos al tributo de que se trata; a la supresión del tratamiento preferencial de que goza la operaciones de compraventa de mercaderías registradas en bolsas y mercados, por no constituir transacciones propias de dichas entidades y hallarse gravadas, cuando se efectúan fuera de dichas instituciones, con la tasa general del 4 ‰; y a la actualización y equiparación del sellado a los recibos y giros internos.

Con respecto a estos últimos, es dable destacar que el proyecto elimina del campo de imposición a los procedimientos de contabilidad que implican trans-

ferencia de fondos, de forma tal que en lo sucesivo sólo sufragarán el impuesto las operaciones instrumentadas mediante el respectivo documento.

En cuanto al tercer grupo de modificaciones —coordinación de los procedimientos administrativos y judiciales— corresponde destacar que se suprime el recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda, de resoluciones dictadas por la Dirección General Impositiva, acordando, en cambio, los recursos de reconsideración y repetición ante la repartición nombrada que autoriza la ley 11.683, sin perjuicio, desde luego, del derecho de los contribuyentes a recurrir a la justicia en los casos y en la forma que determina el texto legal citado.

También se extienden al impuesto de sellos las disposiciones de la ley 11.683 en materia de prórrogas y prescripción, tanto en lo que se refiere a los plazos y a la forma de contarlos, como en lo que atañe a las causas de suspensión e interrupción de las prescripciones.

Cabe agregar que el artículo considerado incluye una exención de carácter general —cuya conveniencia es innecesario destacar— a los contratos y operaciones motivados por convenios suscritos entre el gobierno nacional y gobiernos extranjeros, siempre que exista reciprocidad. La falta de una norma como ésta en la ley vigente, obligó a dictar los decretos a que se refiere el artículo 12 del proyecto adjunto.

IX. — Derechos de inspección de sociedades anónimas

En lo relativo a los derechos de inspección de sociedades anónimas, la reforma introducida por el artículo 13 del proyecto sometido a consideración de vuestra honorabilidad tiende a actualizarlos, dado que datan de enero del año 1932, y al mismo tiempo, a graduarlos en función del capital de las empresas, consultando así la diversa capacidad contributiva de las mismas. También se agrega una norma para suplir una omisión de la ley actual que no prevé sanción alguna por la mora en el pago y se suprimen las disposiciones que establecen la forma y el destino de los ingresos en concepto de derechos, que ya están reglados por la ley 11.683.

Las consideraciones formuladas precedentemente evidencian, como se ha señalado al comienzo de este mensaje, que las reformas impositivas contenidas en el proyecto adjunto responden a un plan armónico que concilia la justa redistribución de la carga tributaria con los intereses de la economía nacional y las necesidades financieras del Estado, a la vez que implican un ponderable mejoramiento de la técnica de aplicación de los gravámenes, razones por las cuales este Poder Ejecutivo no duda de que merecerá la aprobación de vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Pedro J. Bonanni.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1955, la ley 11.683 (texto ordenado en 1952), en la siguiente forma:

1. Substitúyese el artículo 42, por el siguiente:

Artículo 42. — La falta de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar juntamente con aquellos, los recargos que se establecen a continuación, calculados sobre el impuesto adeudado:

Hasta un mes de retardo, cinco por ciento (5 %);
Más de un mes y hasta dos meses de retardo, diez por ciento (10 %);
Más de dos meses y hasta tres meses de retardo, quince por ciento (15 %);
Más de tres meses y hasta un año de retardo, veinte por ciento (20 %);
Más de un año y hasta dos años de retardo, treinta por ciento (30 %);
Más de dos años y hasta tres años de retardo, cuarenta por ciento (40 %);
Más de tres años y hasta cuatro años de retardo, sesenta por ciento (60 %);
Más de cuatro años y hasta cinco años de retardo, ochenta por ciento (80 %);
Más de cinco años de retardo, cien por ciento (100 %).

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la dirección al recibir el pago de la deuda principal, y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta.

El director general podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos.

2. Agrégase al artículo 51, el siguiente párrafo:

Las sanciones previstas en los artículos 43, 44 y 45 no serán de aplicación en los casos que ocurra el fallecimiento del infractor, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

3. Substitúyese el artículo 53, por el siguiente:

Artículo 53. — Prescriben por el transcurso de cinco (5) años las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y aplicar y hacer efectivas las multas en ella previstas.

La acción de repetición de impuestos prescribe por el transcurso de cinco (5) años.

4. Derógase el segundo párrafo del artículo 79.

5. Substitúyese el primer párrafo del artículo 84, por el siguiente:

Serán notificados por cédula, el auto de apertura a prueba, el que designe audiencia para la vista de la causa, las presentaciones de pericias y la sentencia definitiva.

6. Agrégase al primer párrafo del artículo 99, el siguiente:

En casos especiales, las notificaciones podrán hacerse personalmente, por medio de empleados de la dirección general.

En los casos de intimaciones notificadas o verificaciones iniciadas con anterioridad al 1º de julio de 1955, serán de aplicación los recargos establecidos en el artículo 42 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1952).

La disposición sobre prescripción de la acción de repetición contenida en el inciso 3) de este artículo, no regirá para las prescripciones que, de acuerdo con las normas anteriores, se hayan operado antes del 1º de enero de 1955. En cuanto a los términos de las prescripciones en curso a la fecha indicada, se aplicará la nueva disposición.

Art. 2º — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1955, la ley 11.682 (texto ordenado en 1952), en la siguiente forma:

1. Substitúyense los incisos d), h) y j) del artículo 19, por los siguientes:

- d) Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.) distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios;
- h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, cualquiera sea la modalidad adoptada para su liquidación y pago;
- j) Los derechos amparados por la ley 11.723, en la parte que no exceda de veinte mil pesos moneda nacional (\$ 20.000) por año fiscal y siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores y que las respectivas obras estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

2. Agrégase al artículo 19, el siguiente inciso:

- n) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los casos de seguros de vida y mixtos y en los de títulos o bonos de capitalización.

3. Substitúyense los artículos 20 y 21, por los siguientes:

Artículo 20. — Las personas de existencia visible residentes en la República, tendrán derecho a deducir de sus réditos, en concepto de renta no imponible, la suma de siete mil doscientos pesos moneda nacional (\$ 7.200) anuales.

Dicho mínimo no imponible se elevará en dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional (\$ 2.400) anuales para los contribuyentes que tengan cargas de familia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos comprendidos en el artículo 60, superiores a siete mil doscientos pesos moneda nacional (\$ 7.200) anuales, tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma y hasta un máximo de quince mil pesos moneda nacional (\$ 15.000) anuales.

Artículo 21. — Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus réditos, las siguientes sumas en concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican residan en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas supe-

riores a tres mil seiscientos pesos moneda nacional (\$ 3.600), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

- a) Dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional (\$ 2.400) anuales por el cónyuge;
- b) Mil ochocientos pesos moneda nacional (\$ 1.800) anuales por cada descendiente en línea recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro, menor de edad, o incapacitado para el trabajo;
- c) Mil ochocientos pesos moneda nacional (\$ 1.800) anuales por cada descendiente en línea recta mujer (hija, nieta o bisnieta) e hijastra;
- d) Mil ochocientos pesos moneda nacional (\$ 1.800) anuales por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo);
- e) Mil ochocientos pesos moneda nacional (\$ 1.800) anuales por cada hermano varón menor de edad o incapacitado para el trabajo, y hermana, cualquiera sea su edad;
- f) Mil ochocientos pesos moneda nacional (\$ 1.800) anuales por el suegro o suegra;
- g) Mil ochocientos pesos moneda nacional (\$ 1.800) anuales por cada yerno menor de edad o incapacitado para el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad.

La deducción por cargas de familia, sólo podrá efectuarla el o los parientes más cercanos que tengan réditos imponibles.

4. Substitúyese el inciso e) del artículo 45, por el siguiente:

- e) Las rentas vitalicias y los beneficios o participaciones en seguros sobre la vida.

5. Agrégase al artículo 45, el siguiente inciso:

- g) Las utilidades que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etcétera) distribuyan entre sus socios las cooperativas, excepto las de consumo, sin tener en cuenta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago.

6. Substitúyese el inciso b) del artículo 49, por el siguiente:

- b) Los derivados de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio, no incluidos expresamente en la cuarta categoría como así también los de otras actividades similares.

7. Substitúyese el artículo 56, por el siguiente:

Artículo 56. — Quedan sujetos al pago de la tasa del treinta por ciento (30 %), que se abonará con carácter definitivo, y sin perjuicio de lo que les corresponda ingresar en concepto de ausentismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, los réditos imponibles de:

- a) Las sociedades anónimas constituidas en el país;
- b) Las sociedades en comandita por acciones, constituidas en el país, en la parte

que no corresponde a los socios solidarios de conformidad con el artículo 50;

c) Las asociaciones civiles y demás entidades a que se refiere el segundo apartado del inciso f) del artículo 19, en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo;

d) Las sociedades de capital, cualquiera sea su denominación, constituidas en el extranjero que tengan en el país un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, minero o de otro tipo, organizado en forma de empresa estable.

8. Substitúyese el artículo 58, por el siguiente:

Artículo 58. — Los dividendos o utilidades que distribuyan las entidades mencionadas en el artículo 56 no estarán sujetos a retención alguna ni serán computados por sus beneficiarios —sean éstos personas físicas, sucesiones indivisas o sociedades de capital— para la determinación de la renta neta imponible.

9. Agrégase al artículo 60, el siguiente inciso:

e) Del ejercicio de actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana;

10. Substitúyese el artículo 72, por el siguiente:

Artículo 72. — Sin perjuicio de las amortizaciones del artículo precedente, podrán deducirse en concepto de amortizaciones extraordinarias sobre rubros del activo fijo —excepto inmuebles— los importes que se obtengan de aplicar sobre las amortizaciones ordinarias los siguientes coeficientes:

Ejercicio de adquisición Coeficiente

1940 y anteriores	200 %
1941 „ 1942	175 „
1943 „ 1944	150 „
1945 „ 1946	100 „
1947 „ 1948	85 „
1949 „ 1950	60 „
1951	40 „
1952 „ 1953	10 „

A los efectos de lo dispuesto en el 2º párrafo del artículo 4º de esta ley, para determinar el valor aun no amortizado, no se descontarán del precio de costo las amortizaciones extraordinarias autorizadas por este artículo.

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, reducir o suprimir los porcentajes establecidos precedentemente, como asimismo, a fijar coeficientes para ejercicios posteriores a 1953, cuando las circunstancias lo justifiquen.

11. Agrégase al artículo 75, el siguiente párrafo:

Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos superiores al de los jueces de primera instancia.

12. Substitúyese el artículo 87 por el siguiente:

Artículo 87. — Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas —mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad— abonarán la tasa básica del siete por ciento (7 %) sobre los réditos netos sujetos a impuesto.

Cuando esos réditos excedan de diez mil pesos moneda nacional (\$ 10.000) los contribuyentes citados en el apartado anterior pagarán además, una tasa adicional progresiva de acuerdo con la siguiente escala:

Réditos netos imposables anuales

m\$.	m\$.	m\$.
De 10.000 a 15.000 pagarán	el 3 % sobre el excedente de	10.000
„ 15.000 „ 20.000 „ „ 150	más 6 „ „ „ „ „	15.000
„ 20.000 „ 25.000 „ „ 450	„ 9 „ „ „ „ „	20.000
„ 25.000 „ 30.000 „ „ 900	„ 12 „ „ „ „ „	25.000
„ 30.000 „ 40.000 „ „ 1.500	„ 14 „ „ „ „ „	30.000
„ 40.000 „ 50.000 „ „ 2.900	„ 16 „ „ „ „ „	40.000
„ 50.000 „ 75.000 „ „ 4.500	„ 18 „ „ „ „ „	50.000
„ 75.000 „ 100.000 „ „ 9.000	„ 20 „ „ „ „ „	75.000
„ 100.000 „ 125.000 „ „ 14.000	„ 23 „ „ „ „ „	100.000
„ 125.000 „ 150.000 „ „ 19.750	„ 25 „ „ „ „ „	125.000
„ 150.000 „ 250.000 „ „ 26.000	„ 27 „ „ „ „ „	150.000
„ 250.000 „ 500.000 „ „ 53.000	„ 29 „ „ „ „ „	250.000
„ 500.000 „ 750.000 „ „ 125.500	„ 31 „ „ „ „ „	500.000
„ 750.000 y más „ „ 203.000	„ 33 „ „ „ „ „	750.000

Cuando corresponda el recargo por ausentismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley.

13. Deróganse el inciso b) del artículo 45 y el artículo 59.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán en la siguiente forma:

Para los particulares, y las sucesiones indivisas cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los

réditos que perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 1º de enero de 1955. Para las rentas de primera categoría, se estará a lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 11.682 (texto ordenado en 1952).

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o personas asimiladas a comerciantes por la dirección, sobre todos los réditos netos que arrojen sus ejercicios anuales cerrados en el año 1955.

Cuando las entidades mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 56 de la ley 11.682 (texto ordenado en 1952) distribuyan dividendos o utilidades correspondientes a ejercicios cerrados entre el 30 de septiembre de 1950 y el 31 de diciembre de 1954, deberán retener e ingresar a la dirección con carácter definitivo el seis por ciento (6 %) sobre dichos dividendos o utilidades.

Para determinar el monto sujeto a esa retención, se seguirá el siguiente procedimiento:

- a) De la suma de las utilidades impositivas de los ejercicios aludidos en el párrafo anterior —deducidos los quebrantos, si los hubiere— se restarán los importes que, a pesar de estar alcanzados por la ley, no constituyen ganancias; la diferencia constituirá el monto total de los beneficios susceptibles de distribución;
- b) Del monto de beneficios distribuibles así determinado, se deducirán los dividendos o utilidades efectivamente repartidos entre el 4 de abril de 1951 y el 31 de mayo de 1955, el remanente representará la utilidad no distribuida sobre la que deberá practicarse la retención dispuesta precedentemente;
- c) Dicha retención se efectuará sobre el importe en que los dividendos que se distribuyan con posterioridad al 31 de mayo de 1955, excedan la utilidad impositiva de los respectivos ejercicios anuales hasta la concurrencia del referido remanente.

Los fondos de reposición constituidos en los ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 1954, no estarán sujetos al gravamen cualquiera fuere el destino que se diere a los mismos.

Art. 3º—Derógase, a partir del 1º de enero de 1955, el inciso e) del artículo 49 del decreto 14.535/44, ratificado por ley 12.921.

Art. 4º — Modificase, a partir de los ejercicios cerrados desde el 1º de enero de 1955, la ley del impuesto a los beneficios extraordinarios (texto ordenado en 1952), en la siguiente forma:

1. Sustitúyese el último párrafo del artículo 1º, por el siguiente:

Están además exentos los primeros treinta mil pesos moneda nacional (\$ 30.000 m/n.) del beneficio extraordinario determinado conforme a los artículos siguientes.

2. Sustitúyense los incisos c) y f) del artículo 3º, por los siguientes:

- c) Las empresas individuales y las sociedades en general —excepto las anónimas— podrán deducir los importes que fije el Poder Ejecutivo por cada socio que trabaje efectivamente en el país al servicio de la empresa. Esta deducción alcanza a los socios colectivos de las sociedades en comandita por acciones, pero no a los accionistas;
- f) El impuesto a los beneficios extraordinarios será deducible para el cálculo del impuesto a los réditos, pero no para la liquidación del presente gravamen.

El impuesto a los réditos no será deducible para la liquidación de este gravamen. En cam-

bio, se admitirá deducir de la utilidad del año ajustada según las normas de esta ley y de su reglamentación, el porcentaje que fije el Poder Ejecutivo de acuerdo con las variaciones operadas en la tasa promedio del impuesto a los réditos.

3. Derógase el inciso e) del artículo 3º.

4. Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente:

Artículo 5º—El impuesto establecido por las presentes disposiciones se paga anualmente con carácter definitivo.

Pero si en alguno de los ejercicios comprendidos dentro de la vigencia de este gravamen, el balance impositivo arroja quebranto o beneficio inferior al doce por ciento (12 %) del capital y reservas libres, el monto del quebranto más el importe del 12 %, o la diferencia entre el beneficio y dicho 12 % —según el caso—, podrá deducirse hasta la concurrencia del respectivo importe de las utilidades impositivas de los cuatro ejercicios siguientes.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo no se deducirán ni compensarán en el ejercicio en que se liquida el impuesto, las sumas que por los periodos anteriores hubiera correspondido computar en concepto de beneficio extraordinario exento, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 1º.

Los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores que, conforme al régimen del texto ordenado en 1952, fueren computables en el balance impositivo correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del 1º de enero de 1955, podrán deducirse de las utilidades de los cuatro (4) ejercicios siguientes, cualquiera fuere el periodo en el que se hubieren originado.

Art. 5º — Modificase, a partir del 1º de enero de 1955, la ley del impuesto a las ganancias eventuales (texto ordenado en 1952) en la siguiente forma:

1. Sustitúyese el inciso e) del artículo 4º por el siguiente:

- e) Los beneficios provenientes de la venta, cambio o permuta de bienes muebles adquiridos para uso personal del contribuyente y sus familiares salvo que se tratare de obras de arte, automóviles o inversiones de lujo vendidos durante el año por un valor superior en conjunto a treinta mil pesos moneda nacional (\$ 30.000).

2. Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente:

Artículo 5º—El beneficio neto obtenido en la venta de bienes se determinará deduciendo del precio de venta, el precio de compra, el importe de las mejoras efectuadas para conservar o aumentar su valor y el de los gastos necesarios, a condición de que no hubieran sido considerados para el impuesto a los réditos. Tratándose de inmuebles adquiridos con anterioridad al 1º de enero de 1946, se tomará como valor de costo (incluido mejoras) el de la valuación fiscal a esa misma fecha; sin embargo, si ésta fuera inferior al costo real se admitirá este último.

Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o de cualquier otra especie) adquiridos por he-

rencia, legado o donación, se considerará valor de costo el fijado para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la valuación fiscal al 1º de enero de 1946, o el costo real, según cuál fuere mayor. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes será considerado como un gasto deducible a los efectos de determinar el beneficio imponible.

En toda venta de inmuebles y automotores, se permitirá una deducción adicional equivalente al importe que resulte de aplicar al costo los porcentajes que se indican seguidamente por cada año, a contar de aquel en el cual se efectuó la compra o construcción:

5 % hasta 1945;

10 „ desde 1946 hasta 1953, inclusive.

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, reducir o suprimir los porcentajes establecidos precedentemente, como, asimismo, a fijar coeficientes para años posteriores a 1953, cuando las circunstancias lo justifiquen.

Cuando correspondiera considerar como costo la valuación fiscal al 1º de enero de 1946, en el caso de inmuebles, o el valor a esa fecha, en el de automotores, la deducción adicional se computará a partir del año 1946, inclusive.

Tratándose de inmuebles, si la construcción se hubiere realizado en un año distinto al de la adquisición del terreno, los porcentajes se aplicarán separadamente para una y otra.

En ningún caso, la deducción adicional podrá superar el monto del beneficio neto establecido conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo.

En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se hallan sujetas a gravamen. Cada una establecerá el beneficio obtenido deduciendo del valor del bien o prestación recibida, el costo del bien o prestación entregada o comprometida.

3. Agrégase al artículo 6º, el siguiente párrafo:

Cuando el precio de transferencia convenido entre las partes fuere notoriamente inferior al corriente en plaza, la dirección podrá impugnarlo y ajustar impositivamente el valor de los bienes transferidos, a dicho precio de plaza, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. En tales casos, los compradores y los terceros intervinientes en la operación a cualquier título—inclusive los profesionales—podrán ser declarados personal y solidariamente responsables por el impuesto omitido, así como por el pago de las multas previstas en la ley 11.683 para los defraudadores fiscales.

4. Agrégase a la ley, el siguiente artículo:

Artículo . — Para establecer el monto sujeto al gravamen en los casos de emisión de acciones con prima, se deducirá del importe que se obtenga de su colocación, el valor atribuible a las mismas en función del capital de la empresa al principio del ejercicio de emisión, ajustado conforme a las normas que rigen la materia a los efectos del impuesto a los beneficios extraordinarios y en la forma que determine la reglamentación. Cuando dicho valor fuere inferior al nomi-

nal, se deducirá del precio de colocación, este último.

Art. 6º — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1955, la ley 12.143 (texto ordenado en 1952) en la siguiente forma:

1. Substitúyese el artículo 10, por el siguiente:

Artículo 10. — La tasa del impuesto será del ocho por ciento (8 %), que se reducirá al uno veinticinco por ciento (1,25 %) en el caso de ventas de petróleo crudo, fuel oil, diésel oil, gas oil, nafta, kerosene, kerosene tractor, solvente y aguarrás.

2. Substitúyense los incisos a), d), g), i) y k) del artículo 11, por los siguientes:

- a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes mercaderías de producción nacional: ganado, aves y huevos; carne fresca; lanas sucias; cueros secos y salados; plumas sucias, limpias, clasificadas y/o mezcladas; cerdas sucias y lavadas; astas y machos de asta; sebos simplemente derretidos o pisados; leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón vegetal; tabacos, cigarros y cigarrillos; cereales y oleaginosos; hortalizas, legumbres y frutas frescas, semillas y bulbos; harinas de trigo, maíz y centeno; fideos, afrecho y afrechillo; pan, galleta común y productos similares de panadería; azúcar de caña y de remolacha; vinos genuinos; alcohol desnaturalizado para combustible; productos frescos de la pesca; jabones, dentífricos, sueros y vacunas; ladrillos y bloques premoldeados de hormigón; cal, arena y canto rodado; sal fina y sal gruesa; productos de las explotaciones mineras, ya se trate de substancias minerales en su estado natural, en bruto o molidas y los concentrados; hielo común; leche fresca o pasteurizada, crema, manteca y queso; miel de abejas; aceites comestibles; manutención preparada para animales; productos de granja elaborados dentro de un régimen de trabajo familiar y en general, los productos de la ganadería, de la agricultura y forestales en tanto no hayan sufrido elaboración o tratamiento no indispensables para su conservación en estado natural o acondicionamiento;
- d) Las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo constituidas de acuerdo a la ley 11.388 e inscritas como tales en el Ministerio de Comercio;
- g) La venta de libros, diarios, periódicos y revistas;
- i) El suministro de servicios públicos de gas, electricidad y similares y las ventas de estos mismos productos a empresas que presten tales servicios;
- k) Las ventas de papel destinado a la impresión de libros, diarios, periódicos y revistas.

3. Deróganse el inciso b) del artículo 11 y el artículo 12.

Art. 7º — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1955, la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1952), en la siguiente forma:

1. Derógase el artículo 21.

2. Substitúyense los artículos 31, 35, 40, 41 y 43, por los siguientes:

Artículo 31. — Los cigarrillos tributarán un impuesto del cincuenta y dos por ciento (52 %) al setenta y cinco por ciento (75 %) sobre el precio de venta al consumidor, incluso impuesto, por cada unidad básica de diez cigarrillos cuyo peso no podrá exceder de doce y medio gramos. El Poder Ejecutivo fijará la escala de precios y graduará dicho impuesto de acuerdo con las distintas categorías de precios que se establezcan.

Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expendirse en paquetes o envases en las condiciones y forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Artículo 35. — Autorízase al Poder Ejecutivo para aumentar las tasas fijadas en los artículos 32, inciso 1º, 33 y 34, hasta el límite máximo de treinta y dos centavos moneda nacional (\$ 0,32) por gramo en los dos primeros y de sesenta pesos moneda nacional (\$ 60) por kilogramo en el último; así como para rebajar al veinte por ciento (20 %) el impuesto establecido en el artículo 32, inciso 2º de esta ley.

Artículo 40. — Las fábricas podrán emplear en la elaboración de los productos que tengan previamente registrados, los residuos (palos, polvo y destronque) de sus propias elaboraciones y los de otras procedencias que ingresen a manufactura en las condiciones reglamentarias que se determinen, quedando obligadas a incinerar el remanente, trasladarlo a depósito fiscal o transferirlo a otros establecimientos autorizados.

Los organismos técnicos competentes podrán limitar el empleo de residuos en la composición de mezclas o ligas.

Artículo 41. — El alcohol etílico, de cualquier procedencia u origen, pagará en concepto de impuesto interno, por litro y por cada grado centesimal a la temperatura de 15º C., una tasa básica de \$ 0,03 y una tasa adicional de \$ 0,085.

Están excluidos de la tasa adicional, los alcoholes destinados al encabezamiento de vinos en bodega hasta el límite máximo que establezca la reglamentación.

Están exentos de impuesto (tasa básica y adicional) los alcoholes que utilicen en preparaciones medicinales o veterinarias de uso interno, los establecimientos que reúnan las condiciones requeridas por el Poder Ejecutivo, en la proporción que el mismo determine.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condiciones en que el alcohol será librado al consumo.

Artículo 43. — El pago del impuesto al alcohol se hará en la forma prevista en los artículos 4º y 5º de la presente ley, aceptándose letras hasta 180 días de plazo de acuerdo con las normas que establezca la Dirección General Impositiva.

3. Agréganse al artículo 45, los siguientes párrafos:

Los vinos importados de más de 13º de alcohol en volumen se considerarán alcoholizados y deberán tributar el impuesto a razón de \$ 0,03 por

litro y por grado que exceda dicho límite, salvo que los importadores demuestren, mediante la documentación de origen, el carácter natural del alcohol contenido.

Los vinagres importados, cualquiera sea la materia prima de origen, abonarán \$ 0,20 por litro o fracción.

4 Substitúyese el artículo 46, por el siguiente:

Artículo 46. — Los alcoholes que se desnaturalicen en forma reglamentaria quedan liberados de impuesto, salvo cuando se destinen a uso externo medicamentoso o preparaciones medicinales y veterinarias de igual aplicación, a la fabricación de vinagres y a la elaboración de artículos de tocador, en cuyo caso estarán exentos de la tasa adicional únicamente.

5 Substitúyese el primer párrafo del artículo 51, por el siguiente:

Artículo 51. — Como retribución de los servicios de desnaturalización se cobrará una tasa que fijará el Poder Ejecutivo.

6 Substitúyese el artículo 64, por el siguiente:

Artículo 64. — Todas las bebidas, sean o no productos directos de destilación, que tengan 10º o más de alcohol en volumen, excluidos los vinos e hidromeles, serán clasificadas como bebidas alcohólicas a los efectos de este título y pagarán un impuesto interno en estampillado para ser adherido a los envases, de acuerdo a la forma que se establece a continuación:

- a) Los vinos compuestos, vermouths, quínados y similares, pagarán por cada envase de capacidad hasta 50 centilitros, \$ 0,65 m/n., y por los de capacidad de más de 50 centilitros hasta un litro, \$ 1,30 moneda nacional;
- b) Las bebidas que contengan de 10º a 24º y fracción de grado de alcohol en volumen pagarán por cada envase de capacidad hasta 50 centilitros, \$ 0,025 m/n., y por los de capacidad hasta un litro, \$ 0,05 moneda nacional;
- c) Las bebidas que contengan de 25º a 39º y fracción de grado de alcohol en volumen pagarán por cada envase hasta 50 centilitros, \$ 0,05 m/n., y por los de capacidad hasta un litro, \$ 0,10 moneda nacional;
- d) Las bebidas que contengan de 40º a 65º de alcohol en volumen pagarán por cada envase de capacidad hasta 50 centilitros, pesos 0,25 y por los de capacidad hasta un litro, pesos 0,50.

A los fines previstos en el artículo 4º de este texto ordenado, se aceptarán letras hasta 90 días de plazo, cuando se trate de estampillas para vinos compuestos.

7. Agrégase al artículo 74, el siguiente párrafo:

Las compañías argentinas de seguros que hubieren efectuado reaseguros o que reaseguren en el extranjero en los casos especiales previstos en los artículos 17 y 20 de la ley 12.988, 5º de la ley

12.988 (texto ordenado en 1953) y 6º y 8º del estatuto orgánico del Instituto Nacional de Reaseguros aprobado por decreto 10.073/53, no deberán completar la diferencia de tasas a que alude el párrafo anterior. Tampoco completarán las diferencias por los reaseguros en compañías extranjeras realizados con anterioridad a la iniciación de las operaciones del ex Instituto Mixto Argentino de Reaseguros.

8. Substitúyese el inciso b) del artículo 75, por el siguiente:

- b) En relación a las primas convenidas, o al valor asegurado en el caso de seguros sobre la vida, pagarán el mismo sellado que los seguros contratados en la República.

9. Substitúyese el último párrafo del artículo 96, por el siguiente:

Queda prohibido a los efectos de esta imposición, deducir de las unidades de venta, los valores atribuidos a los continentes o a los artículos que las complementen, debiendo el impuesto calcularse sobre el precio de venta asignado al todo. Sólo se autorizará tal deducción para el expendio de cerveza, en cuyo caso se gravará exclusivamente el producto con prescindencia de los envases que lo contienen, siempre que éstos sean objeto de un contrato de comodato.

10. Substitúyense los artículos 110 y 111, por los siguientes:

Artículo 110. — Los objetos suntuarios abonarán en concepto de impuesto interno la tasa del 5 % en cada una de las etapas de su comercialización.

Artículo 111. — Están sujetos al gravamen:

- a) Las piedras preciosas o semipreciosas naturales o reconstituidas; lapidadas; piedras duras talladas y perlas naturales o de cultivo, se encuentren sueltas, armadas o engarzadas;
- b) Los objetos para cuya confección se utilicen en cualquier forma o proporción platino, paladio, oro, plata, porcelana, cristal, jade, marfil, ámbar, carey, coral, espuma de mar o cristal de roca;
- c) Las monedas de oro o plata con aditamentos extraños a su cuño;
- d) Las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas con pieles de peletería;
- e) Los tapices y alfombras confeccionados a mano.

En las condiciones que reglamente el Poder Ejecutivo quedan exentos de este impuesto, cualquiera fuere el material empleado en su elaboración, los objetos que por razones de orden técnico-constructivo integren instrumental científico; los ritualmente indispensables para el oficio religioso público; los anillos de alianza matrimonial; las medallas que acrediten el ejercicio de la función pública u otras que otorguen los poderes públicos; los distintivos, emblemas y atributos usados por las fuerzas armadas y policiales; las condecora-

ciones oficiales; las prendas de vestir con adornos de piel y las ropas de trabajo.

Están asimismo exentos del gravamen los artículos a los que se agregue alguno de los materiales enumerados en el inciso b) bajo la forma de baño, fileteado, virola, guarda, esquinero, monograma u otros aditamentos de características similares.

11. Substitúyese el último párrafo del artículo 112, por el siguiente:

Las cubiertas para neumáticos utilizables en motonetas, bicicletas, triciclos y juguetes y las provenientes de un recauchutaje total o parcial, quedan liberadas del pago del impuesto.

El Poder Ejecutivo establecerá la forma de expendio y circulación de los productos cuyos gravámenes se modifican por el presente artículo, como asimismo la forma, condiciones y plazos en que se satisfarán las diferencias de tributos respecto de las existencias de tales artículos a la fecha de entrada en vigencia de los nuevos gravámenes.

Art. 8º — Substitúyese el inciso 3º del artículo 6º de la ley 14.273, por el siguiente:

- 3º Las sidras, y los hidromeles de diez o más grados de alcohol, cualquiera fuere su clasificación, de producción nacional o importados, abonarán en concepto de impuesto interno, tasas de hasta \$ 0,80 y \$ 0,50, respectivamente.

Art. 9º — Modifícase la ley de contribución inmobiliaria (texto ordenado en 1950), en la siguiente forma:

1. Substitúyese el artículo 21, por el siguiente:

Artículo 21. — De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, la contribución inmobiliaria en la Capital Federal se cobrará anualmente, aplicando sobre el avalúo oficial atribuido a cada inmueble, las siguientes tasas:

1º Inmuebles edificados, excepto los comprendidos en el apartado 2º de este artículo:

- a) El dieciséis por mil (16 ‰) cuando su valuación no exceda de treinta mil pesos moneda nacional (\$ 30.000);
- b) El dieciocho por mil (18 ‰) cuando su valuación sea superior a treinta mil pesos moneda nacional (\$ 30.000) y no exceda de cien mil pesos moneda nacional (\$ 100.000);
- c) El veinte por mil (20 ‰) cuando su valuación sea superior a cien mil pesos moneda nacional (\$ 100.000).

2º Inmuebles edificados, habilitados a partir del 1º de enero de 1955:

- a) El diez por mil (10 ‰) cuando su valuación no exceda de noventa mil pesos moneda nacional (\$ 90.000);
- b) El doce por mil (12 ‰) cuando su valuación sea superior a noventa mil

pesos moneda nacional (\$ 90.000) y no exceda de doscientos mil pesos moneda nacional (\$ 200.000);

- c) El catorce por mil (14 ‰) cuando su valuación sea superior a doscientos mil pesos moneda nacional (\$ 200.000).

Las tasas establecidas en este apartado se aplicarán, asimismo, a partir del 1º de enero de 1955, a todos los inmuebles habilitados o que hayan sido objeto de revaluación, conforme a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 35 de esta ley, desde el 1º de enero de 1952.

- 3º Los terrenos baldíos pagarán el treinta por mil (30 ‰) a partir del 1º de enero de 1955.

2. Agréganse al artículo 24, los siguientes párrafos:

Las construcciones realizadas de acuerdo con el régimen del decreto 16.465/47 y sus complementarios, estarán exentas por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de habilitación de las obras, del mayor gravamen que pudiera corresponderles con motivo de la ampliación efectuada.

Las ampliaciones que se realicen con posterioridad a la vigencia del decreto 16.465/47, estarán exentas de un tercio del mayor gravamen aplicable (parte correspondiente al impuesto territorial) por igual período al establecido en el párrafo anterior, siempre que las nuevas construcciones se efectúen conforme a los requisitos y en las condiciones que establezca la reglamentación.

La exención a que se refieren los dos párrafos precedentes, no alcanza a las diferencias de contribución que correspondiera satisfacer por el inmueble primitivo, a raíz de la facultad acordada al Poder Ejecutivo por el artículo 32 de la presente ley.

3. Substitúyense, a partir del 1º de enero de 1955, los incisos a), e) y f) del artículo 25, por los siguientes:

- a) Las propiedades de la Nación, de las provincias y de la Municipalidad de la Capital Federal ocupadas por dependencias que ejerzan funciones de Estado como poder público;
- e) Los inmuebles destinados al cumplimiento de los fines de las asociaciones mutualistas y de las sociedades cooperativas de consumo que cumplan las exigencias de su respectivo régimen legal;
- f) Los inmuebles en que funcionen escuelas particulares, subvencionadas por el Estado, siempre que el número de alumnos a los que se imparta instrucción gratuita en idioma nacional no sea inferior al que fije la reglamentación; quedan excluidos de los beneficios de esta exención los locadores que no mantengan vinculación con el instituto de enseñanza.

4. Agrégase al artículo 26, el siguiente párrafo:

Exímese de un tercio de la contribución inmobiliaria (parte correspondiente al impuesto territorial) por el término de cinco (5) años contados desde su habilitación, a las propiedades urbanas destinadas a vivienda —incluidas las unidades

construidas bajo el régimen de la propiedad horizontal o propiedad colectiva— cuya valuación fiscal no supere los importes que fije la reglamentación, a condición de que sean habitadas por sus dueños.

Esta exención regirá para las viviendas habitadas a partir del 1º de enero de 1955.

5. Substitúyese el inciso b) del artículo 35, por el siguiente:

- b) Por construcción, ampliación, reedificación, refección, demolición o cualquier clase de transformación.

6. Agréganse al artículo 35, los siguientes párrafos:

La división de edificios para su venta bajo el régimen de la propiedad horizontal, no dará lugar a la rectificación de la valuación fiscal vigente, la que se prorrateará entre las distintas unidades conforme con los índices que determine la dirección.

Déjanse sin efecto, a partir del 1º de enero de 1955, las revaluaciones practicadas de edificios vendidos bajo el régimen de la propiedad horizontal, a los que se aplicará desde dicha fecha, lo dispuesto en el párrafo anterior.

7. Substitúyese el segundo párrafo del artículo 36, por el siguiente:

La acción del fisco y de los contribuyentes para el cobro o la acreditación de las diferencias correspondientes al lapso comprendido entre la fecha de la modificación y la de su denuncia, prescribirá a los cinco (5) años. El término de la prescripción comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se hubiere efectuado la denuncia o la notificación de la nueva valuación, respectivamente. En cuanto a la prescripción de los periodos posteriores al año de la denuncia, regirá lo dispuesto en el artículo 52.

8. Substitúyese el primer párrafo del artículo 46, por el siguiente:

Los compradores de tierras fiscales están obligados a registrar sus títulos o certificados de compra en la Dirección General Impositiva dentro de los dos (2) meses de la fecha de otorgamiento de los mismos.

Art. 10. — Modifícase la ley 13.264, en la siguiente forma:

1. Amplíase a noventa (90) días el plazo establecido en el artículo 14, primer párrafo *in fine*.
2. Substitúyese el artículo 19, por el siguiente:

Artículo 19. — Notificado el propietario de la consignación, declarará el juez transferida la propiedad, sirviendo el auto y sus antecedentes de suficiente título traslativo, el que deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad. Una vez transcurridos veinte (20) días hábiles de comunicado el auto al Tribunal de Tasaciones, a fin de que si éste lo estima conveniente, designe un representante para constatar el estado del bien expropiado, se otorgará la posesión judicial.

Art. 11. — Modifícase la ley de sellos (texto ordenado en 1952), en la siguiente forma:

1. Substitúyese el inciso b) del artículo 2º, por el siguiente:

b) Los extendidos en las provincias o en el extranjero, de cuyo texto resulte que deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción nacional. Con excepción de los casos previstos en la presente disposición, las operaciones y contratos concertados en las provincias con bancos oficiales nacionales ubicados en las mismas, no se encuentran sujetos al pago del gravamen.

2. Substitúyese el último párrafo del artículo 3º, por el siguiente:

Facúltase a la Dirección General Impositiva a aplicar para este impuesto, total o parcialmente, las formas de pago establecidas en la ley 11.683, como así también, para conceder prórrogas conforme a lo previsto en dicho texto legal.

3. Agrégase al artículo 4º el siguiente párrafo:

Toda prórroga expresa de un contrato u obligación se considerará como una nueva operación sujeta a impuesto.

4. Substitúyese el inciso s) del artículo 14, por el siguiente:

s) Las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de prendas, y en general, los instrumentos en que se consigne la obligación del otorgante de dar sumas de dinero cuando no estén gravados por esta ley con un impuesto especial.

5. Substitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Artículo 20. — Cuando el valor de los actos sujetos a impuesto proporcional sea indeterminado, se fijará el sellado en base a una declaración jurada estimativa que deberán formular las partes dentro de los plazos reglamentarios de habilitación de los documentos respectivos en la forma que establezca la Dirección General Impositiva. Dicha estimación podrá ser impugnada por la dirección, quien la practicará de oficio con arreglo a los elementos de información existentes a la fecha del acto.

Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura se pagará el impuesto con arreglo al precio de plaza a la fecha del otorgamiento. A estos efectos las dependencias técnicas del Estado y entidades autónomas asesorarán a la dirección cuando lo solicite.

A falta de elementos suficientes para practicar una estimación aproximada, se aplicará el impuesto del artículo 63, incisos p), r) o s), según corresponda.

Cuando la estimación de las partes sea inferior a la que practique la dirección, se integrará sin multa la diferencia de impuesto, siempre que la declaración jurada estimativa hubiera sido presentada dentro de los términos reglamentarios de habilitación y que en la misma no se hubieran

ocultado los datos destinados a determinar el gravamen o que los consignados no fueran falsos.

6. Agrégase al artículo 26 el siguiente párrafo:

En las escrituras de ampliación de hipotecas constituidas a favor de instituciones oficiales, el impuesto se pagará sobre el monto de la ampliación, aun en el caso de que con motivo de la unificación realizada quede prorrogado el plazo de la obligación originaria.

7. Substitúyese el artículo 32 por el siguiente:

Artículo 32. — Pagarán el cuatro por diez mil (4 ‰), por cada parte, las operaciones de compraventa, al contado o a plazos, de cereales oleaginosos, productos o subproductos de la ganadería o agricultura y frutos del país, semovientes, títulos, acciones, debentures y valores fiduciarios en general, siempre que sean registradas en las bolsas o mercados que las mismas agrupan, de acuerdo con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de aquéllas y concertadas bajo las siguientes condiciones, que reglamentará el Poder Ejecutivo:

a) Que sean formalizadas por las partes, o por comisionistas intermediarios en los formularios oficiales que las bolsas emitan;

b) Que se inscriban en los libros que al efecto llevarán las bolsas para el registro de las operaciones.

Las transacciones que, con observancia de estos mismos requisitos, sean registradas en los mercados a término, satisfarán un gravamen del quince por diez mil (15 ‰) por cada parte.

8. Substitúyense los capítulos IV y V del título II por el siguiente:

CAPÍTULO IV

Operaciones monetarias que devenguen interés

Artículo 33. — La concesión o apertura de créditos o autorizaciones para girar en descubierto, siempre que se encuentren instrumentadas, sin perjuicio del gravamen que establece el artículo siguiente abonarán por cada mes o fracción del término de su vigencia sobre el importe acordado el medio por mil (0,50 ‰).

Artículo 34. — La utilización de créditos en descubierto, los depósitos monetarios y en general todo crédito o débito en cuenta no documentado originado en una entrega o recepción de dinero, que devenguen interés, estarán gravados con el diez por mil (10 ‰) anual.

El impuesto se liquidará en proporción al tiempo de utilización o depósito de los fondos, y se calculará sobre la base de los numerales establecidos para la liquidación de los intereses y en el momento en que éstos se debiten, acrediten o abonen.

En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma independiente sobre los numerales respectivos.

Artículo 35. — Los adelantos y créditos en cuenta corriente especial, garantizados con hipoteca, sólo pagarán el impuesto cuando la operación tenga el carácter de cuenta corriente bancaria, es decir, cuando el importe de la misma pueda ser cubierto total o parcialmente por el deudor y él esté autorizado para hacer nuevamente uso del mismo crédito después de haberlo cubierto.

Exímese de sellado a las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de operaciones sujetas al impuesto determinado en este capítulo, aun cuando esas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones de esas operaciones.

No pagarán el impuesto establecido por el artículo 14, inciso j) los conformes de cuentas comprendidas en las disposiciones de este capítulo.

Artículo 36. — Quedan exentos del impuesto establecido en este capítulo:

- a) Los créditos bancarios en descubierto por un plazo no mayor de dos (2) días, producidos por cheques firmados por comisionistas de bolsa que oficialmente lo acrediten;
- b) Los créditos bancarios en descubierto con caución de títulos públicos concedidos a comisionistas de bolsa;
- c) Los adelantos entre bancos, con o sin caución;
- d) Los créditos en moneda legal concedidos por los bancos a corresponsales del exterior;
- e) Los depósitos bancarios en caja de ahorro, cualquiera sea la modalidad adoptada para la liquidación y pago de los intereses.

Artículo 37. — Sin perjuicio de la responsabilidad fijada para los contratantes por la presente ley la parte a cuyo cargo se encuentra el pago de los intereses deberá ingresar los gravámenes establecidos en este capítulo.

En caso de que la parte a cuyo cargo se encuentra el pago de los intereses se domicilie fuera de jurisdicción nacional o no lleve libros que permitan la liquidación del impuesto, el mismo será ingresado por la otra parte contratante.

Cuando la operación haya sido concertada con los bancos de la ley 12.156, domiciliados en la Capital Federal o territorios nacionales, el impuesto estará a cargo íntegramente de quien contrate con tales instituciones, debiéndose realizar el ingreso respectivo con intervención de los mismos.

9. Substitúyese el capítulo VI del título II por el siguiente:

CAPÍTULO VI

Operaciones con el exterior

Artículo 40. — Toda operación de cambio efectuada por intermedio de instituciones autorizadas a tal fin por el Banco Central de la República Argentina, pagará en concepto de impuesto de sellos la tasa del cuatro por mil (4‰), que estará a cargo de los que operen con dichas

instituciones, siendo éstas responsables de su ingreso.

Estarán sujetos, asimismo, al pago de igual gravamen, los movimientos de fondos que deban realizarse con intervención del Banco Central de la República Argentina, o que a cualquier título, impliquen una transferencia real de fondos, en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 41. — Las operaciones de cambio denominadas pases, que implican una compraventa simultánea de una misma cantidad, igual divisa y distintos plazos, y sus prórrogas, siempre que las partes que intervengan en ambas operaciones sean las mismas, quedan sujetas a un impuesto del uno y medio por mil (1 ½‰) por mes o fracción.

Las operaciones de compraventa de cambio extranjero que se liquiden por compensación exacta o con diferencia o por diferencia de cambio, serán consideradas como una compra y una venta de moneda extranjera y abonarán el impuesto correspondiente a cada operación.

En las anulaciones de compra o de venta de moneda extranjera se pagará el impuesto que corresponda a la nueva operación que se origine con motivo de dicha anulación.

Artículo 42. — No abonarán el impuesto:

- a) Los documentos que deban ejecutarse cumplirse o producir efectos en las provincias;
- b) Los documentos provenientes del exterior simplemente de tránsito en el país;
- c) Los arbitrajes que las instituciones autorizadas realicen entre sí, o con sus corresponsales, o con firmas y particulares del país o del exterior, siempre que se trate de una moneda extranjera contra otra moneda extranjera;
- d) Las operaciones de pase y la compraventa de letras de cambio, cheques, giros, órdenes de pago y transferencias sobre el exterior que realicen entre sí las instituciones autorizadas domiciliadas en el país;
- e) La compraventa de billetes de banco y moneda metálica.

Facúltase al Poder Ejecutivo para extender a otras operaciones la exención acordada por el presente artículo.

10. Substitúyense los artículos 60, 61 y 62 por los siguientes:

Artículo 60. — Corresponde impuesto fijo de: Diez centavos moneda nacional (\$ m/n. 0,10):

- a) A los cheques que no circulen fuera de la plaza de su emisión y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos;
- b) A los duplicados de notas de crédito;

Cincuenta centavos moneda nacional (\$ m/n. 0,50):

- c) A las autorizaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo, para endosar

cheques con el objeto de depositarlos en cuenta corriente, o para librar cheques contra estas cuentas;

- d) A los documentos denominados «trust receipt», por los cuales los destinatarios de las mercaderías retiran de los bancos los documentos de embarque al solo efecto de solicitar el análisis o revisión de la mercadería, siempre que por los mismos no se transfiera su dominio ni se contraiga obligación de pagar algún importe.

Artículo 61. — Los recibos de dinero, de cheques y giros, y en general cualquier constancia que exteriorice la recepción de una suma de dinero consignada en instrumento privado, sus duplicados y demás ejemplares abonarán cada uno el siguiente impuesto:

De más de \$ %	20	hasta \$ %	100	\$ %	0,20
" " "	100	" " "	500	" "	0,50
" " "	500	" " "	1.000	" "	1,00
" " "	1.000	" " "	5.000	" "	2,00
" " "	5.000	" " "	50.000	" "	3,00
" " "	50.000	" " "		" "	5,00

El impuesto a los recibos será satisfecho por sus otorgantes, siendo a cargo de los que recaben los duplicados y demás ejemplares el gravamen correspondiente a esos instrumentos.

Artículo 62. — Los giros internos pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista, abonarán el impuesto con arreglo a la siguiente escala:

De más de \$	20	hasta \$	100	\$	0,20
" " " "	100	" " "	500	"	0,50
" " " "	500	" " "	1.000	"	1.—
" " " "	1.000	" " "	5.000	"	2.—
" " " "	5.000	" " "	50.000	"	3.—
" " " "	50.000	" " "		"	5.—

Estarán sujetos a la misma imposición los cheques de plaza a plaza y todos los demás instrumentos que impliquen transferencias de fondos.

Si los documentos pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento, pagarán el impuesto prescrito por el artículo 14, inciso 1), deduciéndose en tal caso el gravamen tributado en virtud del presente artículo.

El impuesto de los documentos comprendidos en este artículo, cuando se concierten con los bancos de la ley 12.156, será pagado en su totalidad por quienes contraten con tales instituciones.

11. Substitúyense el apartado 3º del inciso e) y el inciso f) del artículo 63, por los siguientes:

3º No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.

- f) A los contratos o promesas de contratos de compraventa de cosas muebles o casas de negocio, cuando se subordine su validez al otorgamiento posterior de escritura pública o al cumplimiento de las formalidades determinadas en la ley 11.867, y a las cesiones y transferencias de tales contratos y promesas.

12. Substitúyese el artículo 90, por el siguiente:

Artículo-90. — Serán repuestas con el sellado de actuación que corresponda, según el valor del juicio, todas las piezas que con cualquier motivo sean agregadas a un expediente judicial o arbitral, salvo los instrumentos públicos o privados que hayan pagado el impuesto de sellos nacional, provincial o municipal correspondiente, los que estén expresamente exceptuados del mismo y los que debiendo haberlo pagado hayan infringido las presentes disposiciones, en cuyo último caso se procederá en la forma establecida en los artículos 137 y siguientes.

En los expedientes judiciales o arbitrales en que una de las partes se halle eximida del impuesto que establece esta ley, la parte contraria que resulte vencida, con imposición de costas, deberá reponer el total del sellado de actuación, incluso las fojas en que actuó o que utilizó la parte exenta.

13. Agrégase al artículo 94, el siguiente inciso:

- g) En general, los juicios susceptibles de tener valor, no previstos en la enumeración anterior, el cinco por mil (5 ‰).

14. Agrégase al artículo 98, los siguientes incisos:

- e) En los juicios por separación de bienes, cuando se promueva la liquidación de la sociedad conyugal o se la instrumente por acuerdo de partes;
- f) En las peticiones de herencias, al determinarse el valor de la parte correspondiente al peticionante.

15. Agrégase al artículo 101, el siguiente párrafo:

En los casos en que una de las partes se halle eximida del impuesto que determina la presente ley y la parte contraria resulte vencida con imposición de costas, ésta soportará y deberá satisfacer el sello de justicia que hubiese correspondido abonar a la parte exenta.

16. Substitúyense los incisos 1º y 2º del artículo 103, por los siguientes:

- 1º La Nación, las provincias, las municipalidades, las dependencias administrativas nacionales, provinciales o municipales, las comisiones de fomento oficialmente reconocidas y las reparticiones autárquicas.

No se encuentran comprendidos en esta exención los organismos o empresas del Estado que ejerzan actos de industria y/o comercio como entidades de derecho privado, salvo el caso de la prestación de servicios públicos o de la realización de operaciones o contratos vinculados con la defensa nacional.

- 2º Los bancos oficiales nacionales, provinciales y municipales y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

17. Agréganse al artículo 103 los siguientes incisos:

48. Los escritos y actuaciones que en cumplimiento de disposiciones legales o reglamen-

tarias presenten y tramiten los patronos y asociaciones patronales ante las cajas nacionales de previsión, a partir de la fecha de sanción de la ley 14.236.

49. Los contratos y operaciones motivados por convenios suscritos entre el gobierno nacional y gobiernos extranjeros, siempre que medie reciprocidad de trato.

18. Substitúyense los artículos 105 y 108, por los siguientes:

Artículo 105. — Estarán exentas del pago de sellado las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de prendas, cuando se pruebe que han sido contraídas para garantizar obligaciones no vencidas, documentadas en jurisdicción nacional o en la forma prevista en el artículo 2º, inciso b) de la presente ley.

Artículo 108. — Ninguna de las exenciones establecidas por esta ley alcanza al sello que deben llevar las fojas de los cuadernos de los protocolos de los escribanos, ni a las de los testimonios de escrituras públicas otorgadas por los escribanos de registro.

19. Substitúyese el artículo 113, por el siguiente:

Artículo 113. — El impuesto correspondiente a las escrituras públicas se pagará bajo la responsabilidad directa del escribano titular del registro sin perjuicio de la que además corresponda al adscrito por las escrituras que él autorice en la forma que establezca la Dirección General Impositiva.

La dirección podrá impugnar las liquidaciones practicadas por los escribanos dentro de los ciento ochenta (180) días de presentadas, intimando a los titulares el pago de las diferencias que pudieran resultar bajo apercibimiento de multa. Dentro de los quince (15) días de notificada la intimación, deberá ingresarse el impuesto omitido, o bien presentar escrito fundado en caso de disconformidad. Contra la resolución que sobre tal reclamo se dicte podrá interponerse el recurso de reconsideración que autoriza el artículo 130 de esta ley.

Transcurrido el término establecido en el párrafo anterior y salvo en el caso de manifestación falsa u ocultación de los elementos destinados a determinar el impuesto, cesa toda responsabilidad del escribano por el importe del sellado omitido, el que será exigible solidariamente contra cualquiera de las partes que debieron satisfacer el impuesto.

20. Substitúyese el artículo 117 por el siguiente:

Artículo 117. — Los recibos sin el impuesto correspondiente, estarán sujetos a las siguientes multas:

De \$ 5 los gravados con \$ 0,20 y \$ 0,50

" " " 1.— " " 2.—
" " " 3.— " " 5.—

De estas penalidades serán solidariamente responsables todos los infractores en la misma extensión que establece el artículo anterior.

21. Substitúyese el capítulo III del título VIII por el siguiente:

CAPÍTULO III

Recursos

Artículo 130. — Contra las resoluciones de la dirección, excepto las dictadas en recursos de repetición, los contribuyentes o responsables podrán interponer recurso de reconsideración que se regirá por las disposiciones de la ley 11.683.

Artículo 131. — Los contribuyentes o responsables podrán repetir el impuesto abonado voluntaria o compulsivamente y las multas pagadas sin requerimiento del fisco interponiendo recurso ante la dirección, el que será requisito necesario para ocurrir a la justicia. Transcurridos seis (6) meses después de iniciada la reclamación sin que se haya dictado resolución administrativa, el interesado podrá optar entre esperar la resolución que deje expedita la vía judicial u ocurrir directamente ante la justicia.

Artículo 132. — Podrá interponerse demanda contenciosa contra el fisco nacional, siempre que se cuestione una suma mayor de cien pesos moneda nacional (\$ 100):

- a) En los casos de resoluciones recaídas en recursos de reconsideración de multas;
- b) En los casos de resoluciones recaídas en recursos de repetición;
- c) En los casos de no resolverse administrativamente dentro del plazo establecido en el artículo anterior el recurso de repetición.

En los supuestos de los incisos a) y b), la demanda deberá presentarse en el perentorio término de quince (15) días a contar de la notificación de la resolución administrativa.

Artículo 133. — El procedimiento judicial se regirá por las disposiciones de la ley 11.683.

22. Substitúyense los artículos 140, 153, 156 y 157, por los siguientes:

Artículo 140. — Cuando el caso no requiera prueba el juez resolverá el incidente en el término de diez días. Cuando la requiera, se abrirá a prueba la causa formando incidente por separado. De la resolución del juez podrá apelarse en relación ante el superior.

Cuando la interposición del recurso la hubiera efectuado el presunto infractor, deberá presentar un memorial en primera instancia, dando los fundamentos del mismo, en el término de ocho días, a contar de la notificación personal de la providencia que lo concede. El juez concederá vista del memorial por ocho días al representante del fisco.

Cuando el apelante fuera el representante del fisco, conjuntamente con la providencia que concede el recurso el juez dará vista a dicho funcionario para que exprese los fundamentos del mismo en el término de ocho días. Del dictamen del representante del fisco se dará vista a las partes por igual término. Esta última providencia deberá notificarse personalmente.

En la tramitación del incidente previsto en los artículos 137 y siguientes, serán de aplicación subsidiaria las disposiciones del Código de Procedimientos de la Capital Federal o de la ley nacional Nº 50, en su caso.

Artículo 153. — La devolución del impuesto en efectivo, el canje, la imputación o compensación en los instrumentos firmados, cuando se hayan efectuado pagos en exceso o por error, será procedente a condición de que el interesado formule su reclamación dentro de los cinco años contados desde el 1º de enero siguiente a la fecha de habilitación del sellado o de pago del impuesto, en el caso de que éste se hubiere ingresado por declaración jurada.

La devolución en efectivo podrá ser realizada por la dirección en forma simple y rápida con cargo a la recaudación del día. En igual forma, devolverá la autoridad policial las multas dejadas sin efecto.

Artículo 156. — Los impuestos establecidos por las presentes disposiciones y toda multa por violación a las mismas, se prescriben por el transcurso de cinco años. El término de la prescripción comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año de la fecha en que debió hacerse efectivo el impuesto o se cometió la infracción.

La acción de repetición del impuesto o multa prescribe por el transcurso de cinco años.

La dirección queda facultada para no gestionar el cobro de la deuda prescrita o que resulte incoobrable por desaparición o insolvencia del deudor.

Artículo 157. — En materia de suspensión e interrupción de prescripción regirán las disposiciones de la ley 11.683.

23. Deróganse los artículos 110, 111 y 114.

Las normas contenidas en este artículo regirán a partir del 1º de enero de 1955, con excepción de las establecidas en los incisos 5º), 9º) y 10º), que entrarán en vigor en la fecha que determine la reglamentación.

Las nuevas disposiciones sobre procedimientos administrativos y judiciales, se aplicarán a las actuaciones en trámite al 1º de enero de 1955 desde el estado en que se encuentren, excepto el caso de actuaciones en las cuales se hubiese interpuesto el recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda antes de esa fecha que se substanciarán conforme al procedimiento establecido en la ley de sellos (texto ordenado en 1952).

Las normas sobre prescripción no se aplicarán a las prescripciones que, de acuerdo con la ley de sellos (texto ordenado en 1952) se hayan operado antes del 1º de enero de 1955. En cuanto a las prescripciones en curso a dicha fecha, su punto de partida se trasladará al 1º de enero siguiente al año de la fecha en que se produjo el hecho u omisión que dió naci-

miento a la acción o facultad respectiva, aplicándose a los términos de prescripción las normas siguientes:

- a) Si se mantienen o alargan los plazos, regirán las nuevas disposiciones;
- b) Si se abrevian los plazos, se aplicarán las disposiciones anteriores, pero sin que el término a correr pueda sobrepasar, desde el 1º de enero de 1955, los plazos de prescripción establecidos en el presente artículo.

Las nuevas disposiciones sobre suspensión e interrupción de la prescripción sólo regirán para los hechos y actos posteriores al 1º de enero de 1955.

Las normas sobre devolución, canje, imputación o compensación contenidas en este artículo, no se aplicarán a los casos en que, conforme a la ley de sellos (texto ordenado en 1952), el plazo para solicitarlos haya vencido antes del 1º de enero de 1955. En cuanto a los casos en los cuales a esa fecha no se hubiere operado aún el vencimiento del plazo, se aplicarán las nuevas disposiciones, a cuyo efecto, el término de cinco (5) años se contará a partir del 1º de enero siguiente a la fecha de habilitación del sellado o la del pago del gravamen.

El impuesto a los cheques fijado por este artículo, regirá para los que los bancos pongan en circulación a partir del 1º de enero de 1955.

Art. 12. — Exímese del impuesto de sellos, siempre que medie reciprocidad de trato, a los contratos y operaciones a que se refieren los decretos 11.554/54 y 13.115/54.

Art. 13. — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1955, la ley de derechos de inspección de sociedades anónimas (texto ordenado en 1952) en la siguiente forma:

1. Substitúyese el artículo 3º por el siguiente:

Artículo 3º — Las entidades reconocidas por el Poder Ejecutivo, así como las autorizadas para establecer en el país sucursal o agencia de sus operaciones y las inscritas conforme a la ley 8.867, pagarán en concepto de derecho anual de inspección una cuota fija de \$ 1.000 más un adicional de \$ 100 por cada millón o fracción de millón del capital suscrito que arroje el balance general correspondiente al ejercicio cerrado en el año inmediato anterior.

Las sucursales o agencias de compañías extranjeras que no tengan capital asignado, pagarán únicamente la cuota fija de \$ 1.000 anuales.

Las sociedades anónimas en liquidación abonarán por el mismo concepto la suma de \$ 500 anuales.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5º, el adicional se calculará en función del capital suscrito en el acto constitutivo de la entidad.

La falta de pago en término de los derechos fijados en este artículo, dará lugar a la aplicación de los recargos establecidos en la ley 11.683.

2. Deróganse los artículos 4º y 6º.

Art. 14. — Aclárase el artículo 17 de la ley 14.385 en el sentido de que el quince por ciento (15 %) a que se refiere el mismo, se aplicará sobre el precio

de venta de las cubiertas en igual forma que la tasa del treinta por ciento (30 %) fijada por el artículo 112 de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1952).

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pedro J. Bonanni.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XI

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1954.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad, dentro del plazo acordado por la ley 14.326, el Proyecto de Presupuesto General de la Nación correspondiente a los ejercicios económicos de 1955 y 1956.

Por tercera vez el proyecto de presupuesto que se eleva a ese Honorable Congreso ha sido programado para regir en más de un ejercicio financiero, de conformidad con la facultad que otorga la Constitución Nacional (artículo 68, inciso 7º), mereciendo destacarse que los resultados prácticos obtenidos con las ejecuciones presupuestarias de los planes de gastos aprobados para períodos bienales en anteriores oportunidades, correspondientes a los presupuestos de 1951 y 1952 (ley 13.922) y de 1953 y 1954 aun en curso (ley 14.158), acreditan la eficacia del temperamento que nuevamente propone el Poder Ejecutivo en esta ocasión.

El Poder Ejecutivo estima propicia la oportunidad para referirse al cumplimiento de la nueva Ley de Organización de los Ministerios, 14.303, sancionada a mediados del año en curso, cuyas disposiciones indudablemente inciden sobre la estructura orgánico-funcional que presenta el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 1955 y 1956.

En dicho proyecto han sido contempladas en su casi totalidad las modificaciones emergentes de esa ley; vale decir que, además de las transferencias de jurisdicción de organismos, dependencias y servicios cumplidas en este año, el proyecto contiene las previsiones necesarias para poner íntegramente en vigencia la nueva organización estructural del Poder Administrador establecida en la referida ley.

El plan de gastos y recursos que se somete a la consideración de vuestra honorabilidad ha sido articulado de acuerdo con los principios que orientan la política económica del gobierno de la Nación. Superada ya la primera etapa de reforma económica y social, durante la cual se mejoraron las condiciones de vida de vastos sectores de la población, el objetivo que señala la coyuntura actual de nuestra economía es el desarrollo del proceso de capitalización del país. Debe procurarse, en tal virtud, acrecentar la proporción de la renta nacional que se destina a la ampliación del equipo productivo y a la reposición del capital existente, a fin de asegurar para el futuro el crecimiento de la producción y el bienestar de la comunidad.

Dentro de estos lineamientos generales, la política fiscal debe constituir un elemento cooperante para el logro de los fines propuestos. El aumento indiscriminado de los gastos públicos, en momentos en que se trata de favorecer la capitalización y conjurar cualquier presión inflacionista potencial, estaría en franca contradicción con semejantes móviles. No es, por cierto, que el Estado haya de abandonar el cumplimiento de actividades y funciones que son esenciales para la colectividad; pero no hay duda que, de acuerdo con las finalidades expuestas, es aconsejable limitar al máximo las erogaciones de carácter meramente burocrático e improductivo, para dar prioridad a aquellas obras eminentemente reproductivas que han de colocarse al servicio directo de la vida económica del país.

Inspirado en tales propósitos, el Poder Ejecutivo ha remitido recientemente a vuestra honorabilidad el proyecto de reformas impositivas que propugna redistribuir la carga fiscal con relación a la capacidad contributiva de la población y limitar al máximo la presión tributaria.

El proyecto de presupuesto para los años 1955 y 1956 ha sido preparado en concordancia con las ideas antes expresadas y tiende a restringir al máximo los gastos públicos, sin perjuicio de atender las necesidades vitales de la Nación.

Consecuente con estos principios, el gobierno ya ha adoptado severas medidas de economía, que se propone acentuar en el futuro, mediante una acción sistemática y permanente, en concordancia con la racionalización y coordinación de las funciones de los distintos organismos del Estado de que informa la nueva Ley Orgánica de los Ministerios 14.303 y el plan de acción sobre el equilibrio de la economía nacional auspiciado por el Poder Ejecutivo, con incidencias directa e indirecta en la economía pública y privada del país.

Todo ello evidencia la mesura en que se inspira la gestión presupuestaria que desde hace años viene cumpliendo el poder administrador, que se pone de manifiesto —como es del conocimiento de vuestra honorabilidad— en los balances de ejecución de los presupuestos de rentas generales que, invariablemente, desde 1947, acusaron saldos positivos, tanto en lo relativo a las economías de inversión cuanto en lo referente al resultado definitivo de los ejercicios financieros.

En efecto, en el lapso de los siete años fiscales corridos desde 1947, inclusive, hasta 1953, las economías de inversión en los planes de gastos atendidos con recursos de rentas generales sobrepasaron, en conjunto, la suma de \$ 5.900.0 millones, mientras que, en igual período, los superávits totalizaron \$ 1.200.0 millones, aproximadamente.

El proyecto de presupuesto para 1955 y 1956 está basado en los mismos lineamientos que quedan expuestos, y es así como, no obstante el natural crecimiento de las necesidades de distintos servicios y funciones a cargo del Estado, que indudablemente se opera con el simple transcurso del tiempo, el monto de los gastos previstos para ser cubiertos con recursos de rentas generales resulta inferior al total de las autorizaciones legales de créditos vigentes en el corriente ejercicio de 1954, como puede observarse en el cuadro inserto a continuación: